

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

4ª REUNION — 1ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) —

MARZO 8 Y 9 DE 1995

Presidencia del señor diputado Carlos Alberto Romero

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

MINISTROS Y FUNCIONARIOS

PRESENTES:

Señor ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos,
doctor DOMINGO FELIPE CAVALLO

Señores secretarios de Comercio
e Inversiones,
doctor CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ,

de Hacienda,
doctor RICARDO GUTIÉRREZ,

de Ingresos Públicos,
doctor CARLOS MIGUEL TACCHI,

de Promoción Económica,
doctor JUAN CARLOS LLACH

de Coordinación Legal, Técnica
y Administrativa,
doctor HORACIO TOMÁS LIENDO,

de Agricultura, Ganadería y Pesca,
ingeniero FELIPE SOLÁ,

de Obras Públicas y Comunicaciones,
doctor WYLIAN OTRERA,

de Transporte,
licenciado
EDMUNDO DEL VALLE SORIA,

de Industria,
licenciado CARLOS A. MAGARIÑOS,

de Energía,
ingeniero CARLOS MANUEL BASTOS;

Licenciado JOSÉ LUIS TAGLIAFERRI
señor jefe de Gabinete

y señor presidente del Banco Central
de la República Argentina,
doctor ROQUE FERNÁNDEZ

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Ángel Leónidas
ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ÁLVAREZ, Carlos Raúl
ÁLVAREZ ECHAGUE, Raúl Ángel
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARANDA, Saturnino Danitti
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERÁ, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENZI, María Cristina
BERNHONGARAY, Antonio Tomás
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Ángel
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABIRÓN, Juan Carlos
CALLABA, Aníbal
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CÁMARA, Mario Ángel
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José

CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lilián
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina¹
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURASONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FALETTI, Julio César José
FAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Delfor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERRERA, Bernardo Eligio
HUMADA, Raúl
IBARRÍA, José María
IBARRICHE, Julio César
ITURRE, E. del Valle
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo

* Incorporada el 28-6-94 en reemplazo del ex diputado Fernando E. Caimmi (falleció el 24-7-94).

KAMMERATH, Germán Luis
 KELLY, Elsa Diana Rosa
 KESSLER, Ana Raquel
 KOTH, Carlos
 LAFALLA, Arturo Pedro
 LAHOZ, José Fernando
 LAMBERTO, Oscar Santiago
 LARRABURU, Dámaso
 LECONTE, Ricardo Guillermo
 LEQUIZABARON, María Laura
 LÓPEZ, Alcides Humberto
 LÓPEZ, José Augusto
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LORADA, Luis Enrique
 LYNCH, Carlos Alberto
 LLOPIS, Enrique Raúl
 MACEDO, Horacio Antonio
 MACHADO, Oscar Alfredo
 MAIDANA, Elsa Ignacia
 MAQUEDA, Juan Carlos
 MARCOLLI, Juan Miguel A.
 MARTÍNEZ, Esteban
 MARTÍNEZ, Manuel Luis
 MARTÍNEZ, Silvia Virginia
 MARTÍNEZ GARRINO, Emilio R.
 MATHEV, Enrique José
 MATEUCCI, Jorge Rubén
 MENDOSA, Claudio Ramiro
 MENDOSA, Martín
 MONTI, Carlos Omar
 MERCADER, Martha Evelina
 MEREZADO LUNA, Ricardo Gastón
 MICHELLI, Marco Aurelio
 MICHITE, Salomón Antonio
 MIGLIOZZI, Julio Alberto
 MORALES de ROMERO, Norma
 MOLARDO, Elvio Francisco
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 MORRAU, Leopoldo Raúl
 MÜLLER, Mabel Hilda
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 NIÑO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PARADA, Alberto
 PARAJÓN, José María
 PAROLA, José María
 PASQUAL, Rafael Manuel
 PELAEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio

PÉREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio F.
 PERRINI, Gioconda Eulalia
 PESCE, Félix
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 RODRÍGUEZ SARDU, Hugo B.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROIG, Ángel
 ROJO, Rubén Darío
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUZ PALACIOS, José David
 SAADI, Ramón Eduardo
 SAIINO, María Antonia
 SANFUEZ, Dora
 SANTIN, Eduardo
 SCHULZ, Carlos José
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando E.
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Federico
 SUCARIA, Nefel
 SUIERO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOGNI de VELV, Adriana
 TOLOMEU, Leonor Ester²
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TRETTEL MEYER, Raúl
 TROYANO, Silvia Elena
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Ángel
 VARELA CID, Eduardo
 VÁZQUEZ, Roberto
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENESIA, Guillermo Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Atilio Oscar

VITAR, José Alberto
 ZICARELLI, Orlando A.
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ACHEM, Antonio
 ALENDE, Oscar Eduardo
 ÁLVAREZ, Carlos Alberto
 ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
 BONOME, Silvia Nélida
 CERDERA, Rogelio Rafael
 GLOSE, Ramón Alberto
 FLORES, Rafael Horacio
 FLORES DE ALBA, Manuel H.
 KANDEL, Ernesto Refaado
 MUSEO, Marcelo Ernesto
 OGUIN, Leopoldo Manuel
 PICCOLINI, Ana Ita
 ZAVALA, José Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ADALME, Felipe Teófilo
 ALBERTI, Juan Carlos
 AYETZ, Liliana
 BENEDETTI, Jorge Enrique
 BRUZZO, Omar Obdulio
 CAMPERO, Rodolfo Martín
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CEBALLOS, Walter Alberto
 FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
 FRAGOSO, Francisco Ulises
 GAUNA, Juan Octavio
 GUERRERO, Luis Serafín
 HERNÁNDEZ, Antonio María
 MANFREDOTTI, Carlos
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MENECHINI, Javier Reynaldo
 MONTIEL, Sergio Alberto
 MORELLO, Emilio Pedro
 MURIEL, Néstor Jorge
 NEDER, Jorge Humberto
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PERALTA, Anibal Pedro
 RICO, Aldo
 SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
 SÁRQUIZ, José Alberto

— La referencia acerca del distrito bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1994.

² Incorporado el 4-8-94 en reemplazo del ex diputado Eduardo P. Amadeo (renunció el 1-8-94).

³ Incorporada el 8-2-95 en reemplazo del ex diputado Jorge A. Escobar (renunció el 28-12-94).

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 353.)
2. Convocatoria a sesión especial. Lectura de la documentación relacionada con la convocación a sesión especial y pronunciamiento de la Honorable Cámara respecto de los asuntos a considerar. (Página 353.)
3. Fijación de días y horas de sesión de la Honorable Cámara. (Pág. 356.)

4. Autorización a la Presidencia para girar los asuntos entrados a las respectivas comisiones y efectuar las comunicaciones de estilo al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. (Pág. 356.)
5. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y se dispone la creación de las sociedades de garantía recíproca (SGR) (86-P.E.)

94). Se sanciona el dictamen de mayoría con modificaciones. (Pág. 357.)

6. **Moción de orden** formulada por el señor diputado Matzkin para que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio. No se somete a votación. (Pág. 443.)

7. **Moción de orden** formulada por la señora diputada Zuccardi para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de ley de su autoría sobre régimen de regulación de la fecundidad humana (2.902-D-94). Es rechazada. (Página 444.)

8. **Informes del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos** sobre la situación económico-financiera por la que atraviesa el país. (Pág. 444.)

9. **Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda** en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (65-P.E.-93) y del señor diputado Santín (5.907-D-93) por los que se modifica el título VI de la ley 23.966, sobre impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico. Se pasa a cuarto intermedio. (Página 489.)

10. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 504.)

B. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1. Michelli. (Pág. 514.)
2. Gazia. (Pág. 516.)
3. Perrini. (Pág. 517.)
4. Salino. (Pág. 518.)

C. Asistencia de los señores diputados a las reuniones de comisiones (meses de enero y febrero de 1995. (Pág. 519.)

—En Buenos Aires, a los ocho días del mes de marzo de 1995, a la hora 17 y 5:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pierri). — Con la presencia de 134 señores diputados queda abierta la sesión especial. (*Aplausos.*)

Invito al señor diputado por el distrito electoral del Chubut, don José Salvador Arrechea, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don José Salvador Arrechea procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto (*Aplausos.*)

2

CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura del pedido de sesión especial formulado por varios señores diputados en número reglamentario.

Sr. Secretario (Estrada). — Dice así:

Buenos Aires, 1º de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar la realización de una sesión especial para el día miércoles 8 de marzo a las 15.00 horas para tratar el siguiente temario:

1. — Determinación de días y horas de sesión para el próximo período ordinario.

2. — Modificación de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico (Orden del Día Nº 1.223).

3. — Régimen especial para las pequeñas y medianas empresas y creación de las sociedades de garantía recíproca (Orden del Día Nº 1.216).

4. — Régimen de educación superior (Orden del Día Nº 1.147).

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Jorge R. Matzkin. — Carlos E. Branda. — Carlos A. Romero. — Marcelo E. López Arias. — María A. Salino.

Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se dará lectura de la resolución de la Presidencia por la que se convocó a sesión especial.

Sr. Secretario (Estrada). — Dice así:

Buenos Aires, 3 de marzo de 1995.

VISTO la presentación efectuada por el señor diputado Jorge Matzkin y otros señores diputados, en el sentido de que se convoque la realización de una sesión especial para el próximo día 8 de marzo con el objeto de considerar diversos asuntos: y

CONSIDERANDO:

Los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Cámara. *El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

Artículo 1º — Citar a los señores diputados a la realización de una sesión especial para el día 8 de marzo de 1995, a las 15 horas, con el objeto de considerar el siguiente temario:

— Fijar días y horas de sesión para el período ordinario de sesiones.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita autorización de la Honorable Cámara para comunicar las sanciones que se produzcan en el transcurso de la presente sesión y las siguientes, cuando ellas no hubieren concluido.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

5

REGIMEN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenidos en el Orden del Día N° 1.216, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y se dispone la creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) (expediente 86-P.E.-94).

(Orden del Día N° 1.216)

Dictamen de las comisiones *

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje y proyecto de ley mediante el cual se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), Creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR); y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el informe informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Sección I

Objeto

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

* Artículo 90 del reglamento.

Sección II

Definición de PYMES

Art. 2º — Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diversos sectores de la economía en que se desempeñan sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.

Sección III

Instrumentos

Art. 3º — Se facilitará el acceso de la pequeña y mediana empresa al crédito estableciéndose entre otras facilidades, bonificaciones de la tasa de interés, ya sea mediante la creación de nuevos instrumentos o a través de la continuidad de los ya existentes.

Art. 4º — La bonificación, a la que se refiere el artículo anterior será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:

- Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;
- Créditos para la constitución de capital de trabajo;
- Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización y tasas comparables a las más bajas de plaza;
- Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales, organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;
- Créditos para financiar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.

Art. 5º — La bonificación a que se refieren los artículos 3º y 4º y el fondo a que se refiere el artículo 6º se atenderán con los créditos que anualmente se establezcan en el presupuesto general de la administración nacional.

Art. 6º — A los efectos de complementar lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación, creará un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artículos.

Art. 7º — El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.

En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artículo 4º de la presente.

3º—El Congreso Nacional fijando los cupos presupuestarios y el Banco Central que fijará las reglas para los bancos operadores.

4º—Los bancos operadores serán los depositarios del certificado de garantía de proyecto.

Esto que aquí se presenta es sólo un esquema para demostrar que existen soluciones sin precarizar las relaciones laborales, y que el mismo Estado nacional había encontrado un buen comienzo en el Programa de Vinculación entre la Universidad y la Empresa, que ahora parece haber soslayado, como si se tratara de compartimientos estancos y no de un mismo país y de soluciones a los mismos problemas económicos.

Es importante destacar que en el proyecto que estamos desarrollando, y que no tuvimos oportunidad de exponer, puesto que el despacho en análisis fue firmado entre las sombras y votado sin discusión en las comisiones pertinentes, incluye como requisito que la empresa solicitante del crédito no reciba dinero en efectivo, para evitar que se repita la historia de los empresarios que colocaban el dinero que recibían como estímulo para la producción, a tasas diferenciales en mesas de dinero y lo recibían con bajos intereses que subvencionábamos todos.

La idea es que el empresario reciba las maquinarias, los proyectos, los insumos, etcétera, y que los pagos se efectúen directamente por los bancos operadores, a los acreedores correspondientes, incluso si se tratara del pago de salarios del personal.

Con lo expuesto, queremos dejar claramente expresado, que es posible desarrollar políticas de empleo sin dejar desamparado al trabajador, y sin generar instrumentos de intermediación que se convertirán en una guillotina, para las pocas PYMES que quedan, y que no podrán competir de manera exitosa, ni en el mercado interno, ni a nivel internacional mientras siga vigente esta política antiinflacionaria, basada en la recesión y el desempleo.

Aldo Rico. — Liliana Ayetz. — Guillermo C. Fernández Gill. — Emilio P. Morello.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente, sobre el final del siglo XX la economía mundial se enfrenta con un problema de características alarmantes por las consecuencias sociales y morales que produce entre los hombres: me refiero a la falta de trabajo. Este flagelo se produce en un momento de la historia en el cual se perfilan un nuevo modo de coexistencia entre los pueblos en su camino a la conformación de una comunidad de naciones, unida por la interacción de las mismas y el respeto a sus individualidades y estilos de vida.

Las propias naciones poderosas y desarrolladas, en el cenit de su avance tecnológico, no han podido esquivar el fantasma de la desocupación, a pesar de la riqueza de recursos y la sólida relación de fuerzas entre el capital y el trabajo.

A tal punto se ha agudizado este problema que un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo da cuenta de que el desempleo ha superado el 8 por ciento en los países desarrollados, una cifra que involucra a decenas de millones de personas.

Los países de economías emergentes, como no podía ser de otra manera, no han quedado al margen de este estado de cosas y sufren el mismo mal, con el agravante de que en los mismos no se ha vivido en una solución de continuidad económica y política durante los últimos cuarenta años que haya podido generar solidez y dinámica en las estructuras productivas.

Argentina no es una excepción a esta coyuntura y las declaraciones no son suficientes para resolver el problema. Debemos revertir la situación de manera urgente y comprometiendo a todos los sectores que se ven afectados por la falta de trabajo y producción.

Estamos incorporados a un modelo económico que cuenta con los altibajos propios de las grandes transformaciones que apuntan a un cambio serio y duradero, un cambio que incluya a nuestro país entre las naciones que habrán de ingresar al siglo XXI con un claro criterio de acción productiva que garantice un futuro donde la inseguridad y la incertidumbre pasen a ser un episodio de la historia. En esto creemos, sin especulaciones y sin sobredimensionar nuestra realidad aun en el mejor de los casos.

Reconocemos como representantes del pueblo y acompañantes del gobierno nacional una asignatura pendiente. Me refiero a la ocupación masiva de trabajadores.

Esto que manifiesto no es una novedad sino un simple reconocimiento que ya ha sido declarado por el Poder Ejecutivo, sin esconder la cabeza como el avestruz y tratando de encontrar soluciones a un problema que afecta al conjunto de la sociedad.

Me permito decir que resulta infantil pensar que los porcentuales de desempleo en nuestro país no afectan al gobierno ni sensibilizan a sus responsables, sabiéndose muy bien que la mejor garantía para la estabilidad social y económica tiene en la ocupación plena uno de sus más sólidos pilares.

Por eso hemos elaborado un proyecto de ley que lejos de la magia no supone un mecanismo

pero sí un importante coadyuvante para disminuir los índices de desempleo que nos preocupan, porque nos sentimos responsables de dar soluciones de la mejor y más rápida forma posible.

Hemos tomado en cuenta un sector del empresariado —la pequeña y mediana empresa— como ámbito para desarrollar una política tendiente a la generación de empleo mediante el estímulo de la reconversión de los sistemas productivos.

Las PYMES constituyen un segmento que contiene casi un 60 por ciento de los trabajadores argentinos; además contribuyen al desarrollo y crecimiento del mercado interno y producen el 40 por ciento de nuestro producto bruto interno.

El agro, la industria, el comercio y los servicios privados en buena medida se estructuran sobre la pequeña y mediana empresa. Muchas de ellas requieren de una reconversión urgente para que asistidas puedan asumir el desafío adicional que presenta hoy el Mercado, además del fortalecimiento del mercado interno nacional.

Para promover ese desarrollo necesitamos generar lo que el Poder Ejecutivo nacional ha designado con el nombre de medio ambiente económico, que es propicio para esta propuesta.

Lo expuesto implica que debemos superar la rigidez de las normas jurídico-laborales en su carácter genérico y abstracto para evitar la sustracción de las PYMES a las soluciones negociadas colectivamente por las grandes empresas que han monopolizado las representaciones patronales en los convenios colectivos.

Con este proyecto de ley que proponemos damos la oportunidad de que se discuta dentro del convenio —con la participación obligada de los representantes de las PYMES de cada gremio— cada modalidad en particular, para evitar las absorciones que generan las decisiones tomadas en general que son de difícil aplicación.

Además hemos definido qué es la pequeña y mediana empresa, determinando que es aquella cuyo plantel no sea de más de 40 trabajadores y cuya facturación no supere lo establecido por actividad por la Comisión Especial de Seguimiento que se crea por el artículo 104 del proyecto de ley en consideración.

Se indica una retroactividad al 1º de enero de 1995 a los efectos de computar los trabajadores existentes antes de esa fecha en las empresas con esta modalidad de trabajo.

Además se crea el Registro Único de Personal en el cual se asentarán todos los trabajadores,

cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho registro será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente. Con el registro mencionado se permitirá un blanqueo laboral de alto valor para los trabajadores, empleadores y el Estado, regularizándose a partir de la lógica y la equidad el sistema de producción y la interacción entre sus actores.

También se crean las sociedades de garantía recíproca con el carácter de sociedades anónimas, con el objeto de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito.

El objeto social principal de esas sociedades será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.

Dichas sociedades podrán dinamizar el acceso a los fondos que permitirán la reconversión productiva de las PYMES y que éstos cuenten con beneficios impositivos que alivien sus obligaciones, agilizándoles su proceso de crecimiento.

Definida la pequeña y mediana empresa generando un mecanismo de blanqueo del personal contratado por ellas, creando una modalidad de sociedades que permitirá el acceso al crédito, aliviando las cargas impositivas y flexibilizando la relación del capital con el trabajo en el marco de las discusiones emergentes de los convenios colectivos de trabajo ante cada caso en particular, podremos generar puestos de trabajo en el corto y mediano plazo.

Quizás el punto en el cual se resuelve cualquier crisis es aquel donde se junta el deseo de cada uno con lo inevitable.

Según nuestro criterio, hoy en nuestro país éstas son las soluciones para un problema que no se resuelve con imputaciones, gritos o manifestaciones, y menos aún con falsas alternativas declamadas que terminan diluyéndose en propuestas electorales en las que se plantea todo menos un cambio estructural a la dinámica del modelo.

Queremos dar trabajo de manera urgente, y como creemos que éste es el camino que debemos recorrer para lograrlo, proponemos la aprobación del proyecto de ley en consideración. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Kammerath. — Señor presidente: el bloque de la Unión del Centro Democrático aprobará en general el proyecto de ley en consideración, con una expectativa razonable respecto a su operatividad en la vida social y económica de la Argentina.

Ha pasado mucho tiempo desde que en esta Cámara se presentaron los primeros proyectos de legislación laboral, como por ejemplo el que remitió el presidente Roca con la firma de su ministro Joaquín V. González, el de Saavedra Lamas, el de Alfredo Palacios y tantas otras iniciativas.

Hoy, la demanda social más importante se concentra en encontrar el modo de crear las condiciones para fomentar el empleo. Los índices de desempleo son en nuestro país realmente duros, y resulta aterrador pensar que detrás de cada número de ese índice hay cientos de miles de hombres y mujeres sin la posibilidad de afrontar con dignidad la vida y cubrir las necesidades básicas mínimas.

La República Argentina tiene el desafío de discutir una nueva legislación laboral para las pequeñas y medianas empresas. El Congreso de la Nación sancionó no mucho tiempo atrás un proyecto de ley sobre fomento del empleo, pero una cláusula que a nuestro entender es incorrecta le quitó operatividad. En ese sentido compartimos la filosofía del proyecto que estamos analizando de contemplar para la pequeña empresa un marco de flexibilizada modernización laboral. Es mejor la modernización que la flexibilización. No se trata de quitar, disminuir o atenuar derechos legítimos de los trabajadores sino simplemente de crear fuentes de trabajo e incentivar a los empleadores a dar trabajo a los cientos de miles de personas que hoy carecen de esa oportunidad.

Como bien lo ha señalado el señor diputado Borda, las PYMES son importantísimas en la vida económica y social de la Argentina, pero más todavía en la creación de fuentes de trabajo.

También constituye un avance el inicio de la descentralización de la discusión colectiva en nuestro país.

Lo que nos ha llevado a apoyar en general esta iniciativa es el grado de consenso inicial que tuvo, con la adhesión de prestigiosas instituciones empresarias y sindicales y del gobierno nacional. Sería muy duro, casi dría cruel, para la República Argentina, tener un debate difícil, de posiciones absolutamente encontradas, en esta materia. Ello podría generar un enfrentamiento sectorial entre trabajadores y empresarios o entre políticos y trabajadores.

Diferentes sectores de la oposición sostienen que este proyecto de ley está condenado al fracaso, pero nosotros consideramos que no es así, aunque por supuesto creemos que es necesario

crear las condiciones que den confianza respecto de que la legislación que hoy propiciamos modernizar permanecerá en el tiempo como un verdadero laboratorio social que indicará si es cierto o no que existe un anacronismo en el actual régimen colectivo de trabajo de la República Argentina.

Ojalá que el debate que se abra, las oportunidades que se encuentren y la discusión regional o sectorial que se permita en las provincias creen las fuentes de trabajo que la sociedad reclama. Pero debe entenderse que no puede ser el Estado el que cree esos puestos de trabajo sino sólo y exclusivamente la actividad privada como motor del crecimiento de la Nación Argentina.

Ojalá esta ley pro PYMES sea "pro PYMES", aunque parezca una afirmación de Perogrullo. Ojalá se produzcan mejoras en las condiciones de nuestras pequeñas y medianas empresas.

Discutimos si era de cuarenta o de cincuenta el número de empleados para medir lo que es una pequeña empresa. Aunque nosotros preferimos que dicho número fuera cincuenta, en la iniciativa se ha previsto que fuera cuarenta. No vamos a hacer una discusión sobre este tema. Bienvenida sea una legislación que modernice en general el régimen de las relaciones laborales de la Argentina, en las que se registra un círculo vicioso que desalienta la creación de empleo.

Si esta norma no va de la mano de la pronta sanción de un proyecto que modernice el régimen de accidentes de trabajo, quizás éste sea un esfuerzo inútil, porque para las PYMES es tan difícil mantenerse en vigencia con el actual régimen de accidentes de trabajo que aun este incentivo para el empleo será insuficiente. Si las reglamentaciones referidas a las relaciones laborales y a los accidentes de trabajo no se sustituyen, dicho círculo jamás será virtuoso sino que seguirá siendo vicioso y creará, como hasta ahora, un espacio para el desempleo de millones de argentinos.

Ojalá que esta norma tenga pronta sanción y promulgación y opere en la realidad. Si fracasa, la sociedad deberá discernir otros mecanismos para la creación de empleo. En este sentido en muchos países se dictaron leyes similares; en algunos de ellos dieron resultado y en otros no.

El conocimiento que tenemos —por lo menos de las provincias que representamos— nos indica que en muchos rubros de la actividad comercial y económica ha habido una demanda importante de creación de fuentes de trabajo;

pero por otro lado, se produjo el desincentivo de la vigencia de los costos laborales, no en beneficio de los trabajadores sino del Estado, por los aportes patronales que se deben realizar de acuerdo a los distintos sistemas: el contrato de aprendizaje, el referido al lanzamiento de una nueva actividad. Y el de tiempo determinado, así como también otro conjunto de modalidades contractuales modernas que sólo funcionan en el marco de una economía social de mercado, con el que se supone debe ser el rol de protección de los derechos de las entidades sindicales.

La sociedad se ha modernizado, y en ese sentido hay un creciente concepto de la defensa de los derechos por parte de los trabajadores, aunque en un marco de desempleo estos derechos crujen frente a la realidad.

El bloque de la UCEDÉ va a votar afirmativamente en general esta iniciativa. Quizás hubiera merecido una reforma más a fondo, como la que propusimos, pero bienvenida sea la que estamos considerando. Ojalá opere sobre la realidad. Esperamos que esta iniciativa permita que vuelvan a brillar los ojos de tantas personas que hoy, cuando vuelven a sus casas después de deambular golpeando las puertas de fábricas y comercios, no tienen la posibilidad de decir a sus familias que han encontrado un trabajo cuyo salario les permite afrontar los deberes de la vida en sociedad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: en primer lugar quiero decir que en los últimos años en nuestro país las pequeñas y medianas empresas parecían ser el gran ausente de este proceso de transformación que hemos vivido. El solo hecho de que estemos sentados aquí discutiendo este tema, más allá de nuestra aceptación o no del texto de la iniciativa, nos parece muy importante; creemos que ya es un gran paso incluir este tema en la agenda de discusión de las cuestiones nacionales.

De todas maneras pensamos que esta iniciativa tiene serias insuficiencias y desequilibrios, por lo que nuestra bancada va a votar negativamente en general. Para fundamentar dicha postura podemos decir en términos generales que tenemos serias observaciones en cuanto a la forma en que se caracteriza a las PYMES, dejando resquicios que pueden dar lugar a que la autoridad de aplicación en forma arbitraria distorsione el sentido que se quiere dar a esta legislación.

Por otro lado hay una serie de instrumentos que se configuran en esta norma y que serían los que realmente podrían dar beneficios para que las PYMES que hoy están zozobrando en la Argentina, en medio de un cúmulo de dificultades, puedan mejorar su situación y esto no se transforme en una mera expresión de deseos. Me refiero a algunos aspectos que entendemos deben tener un carácter imperativo, como ser: garantizar un acceso al crédito a valores adecuados para las PYMES, constituir fondos de garantía o sociedades de garantías recíprocas y facilitar el acceso a la tecnología y a la capacitación por parte de ese sector del empresariado nacional.

Lo que sí queda como imperativo en este proyecto de ley es lo que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y este modelo socioeconómico buscan desde hace tiempo y todavía no han logrado: el consenso de la sociedad. Atrás del nombre simpático de PYMES se pretende avanzar en un proyecto de precarización laboral, donde el mejoramiento de aquéllas es nada más que un traslado del sector laboral al empresarial.

Estas serias desproporciones que se observan en el modelo propuesto por el Poder Ejecutivo hacen que nuestro bloque se oponga en general al proyecto de ley y formule observaciones durante el tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Bocca. — Señor presidente: nos encontramos con un proyecto de ley sobre las PYMES que tiene un capítulo referente a diversas medidas financieras y otro que atañe al derecho del trabajo. Esta iniciativa se ha presentado a la opinión pública planteando que está destinada a reducir el alto índice de desocupación que muestra nuestro país.

El modelo económico que se está aplicando en la República no favorece en nada a la pequeña y mediana empresa: el plan económico no las tiene en cuenta ni las jerarquiza. Todo el mundo sabe que este modelo ha fomentado la concentración del capital y los intereses económicos en desmedro de la pequeña y mediana empresa.

Esta concentración surge de una idea económica: era la opinión, por ejemplo, de Martínez de Hoz, quien pensaba que las pequeñas y medianas empresas no tenían capacidad competitiva y no podían llegar al mercado mundial; decía que había que recurrir a las grandes empresas.

Nosotros no compartimos esta concepción. No lo hacemos sólo por ser socialistas, sino porque la experiencia económica mundial muestra otra realidad. En ella el rol fundamental en el campo de la economía privada está desempeñado por las pequeñas y medianas empresas. La experiencia internacional ha demostrado que estas empresas no sólo han producido proporcionalmente la mayor cantidad de fuentes de trabajo, sino que también permiten una relación personal distinta entre los trabajadores y los empresarios, lo que crea otro espíritu y otra modalidad en el ámbito de las relaciones del trabajo.

El presente siglo, con el surgimiento de los cambios tecnológicos también ha mostrado que, lejos de lo que se suponía, no son las grandes empresas las que llevan adelante este proceso, sino que son las pequeñas y medianas las que posibilitan los cambios tecnológicos y desde el punto de vista geopolítico —totalmente ausente en el modelo económico que se aplica en el país— es evidente que son estas últimas empresas las que permiten la ocupación de nuestro territorio, que debe ser un objetivo esencial en los planes de cualquier gobierno de la Nación Argentina.

Esta valoración no se ha tenido en cuenta en materia impositiva, ya que cada día se aplica una política más regresiva en tal sentido. Por otra parte se ha visto totalmente cerrado el acceso al crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, debido a que por sus dimensiones también se ven privadas de incursionar a nivel internacional en busca de fondos. Tampoco en la política arancelaria se han tenido en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas.

Ante este panorama aparece la angustia de muchos pequeños y medianos empresarios que ven sus días contados o que ya han tenido que cerrar sus plantas. Esa angustia y el problema de la desocupación —que es real y terrible, y el más grave desde el punto de vista humano— son utilizados para cercenar los restos de la legislación laboral en nuestro país argumentando a tambor batiente que es preferible tener trabajo que contar con una exquisita legislación del trabajo que ya no se cumple y nadie la hace cumplir. Eso ocurre porque la autoridad, que es responsable de su aplicación en todos los ámbitos, no la hace cumplir.

Por ello, dado que nadie la cumple ni se hace cumplir, se decide que es mejor blanquear el incumplimiento y suprimirla para quedarnos sin legislación laboral y volver a las normas

primitivas de la locación de servicios del Código Civil. De esa manera se promete que se multiplicarán los puestos de trabajo y que florecerá la situación de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ambos supuestos son absolutamente ajenos a la realidad.

Se acaba de conocer un dictamen de la Organización Internacional del Trabajo en el que se determina que este tipo de flexibilizaciones o supresiones del derecho laboral en ninguna parte del mundo han producido más puestos de trabajo. De la misma manera tampoco se logra mejorar la situación de las PYMES si no se producen retoques en el plan económico ni se introducen modificaciones concretas en las políticas impositiva, crediticia y arancelaria. Si no se llevan a cabo estas medidas el efecto de la norma que estamos discutiendo será neutro desde el punto de vista del sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

Se está utilizando a las PYMES y a la desocupación para enviar mensajes a los capitales extranjeros diciéndoles que pueden venir porque en la Argentina tampoco hay costos laborales, pero no se dan cuenta de que esos capitales no vienen a nuestro país no porque exista un derecho laboral sino porque conocen el agotamiento del plan Cavallo.

En un gesto desesperado se llevan hacia adelante estas medidas, entre las que se incluye la modificación a la ley de accidentes del trabajo y otras iniciativas que tienden a posibilitar el accionar del capital extranjero en nuestro país; en un mismo nivel que en los países más desprotegidos, más subdesarrollados y carentes de una legislación social como la que en su momento fuera pensada por los socialistas —de la que hizo honor nuestra República— y aplicada masivamente por el primer gobierno justicialista. Creen que borrando todo eso cambiarán las posibilidades económicas del país, pero están en un profundo error.

Por ello decimos a los pequeños y medianos empresarios que éste es un terrible engaño, que sin modificaciones del modelo económico no podrán salir adelante y tendrán que seguir cerrando sus fábricas. El problema es mucho más global. Los señores diputados justicialistas y los propios representantes del Poder Ejecutivo reconocieron en reunión de comisión que no era este proyecto de ley el que permitiría operar cambios sino que estos requieren de una modificación global del plan económico en cuanto a su aplicación en estos momentos que vive el país.

Señor presidente: no detallaré todas las supresiones reales que contiene la iniciativa en tratamiento con respecto a normas protectoras de nuestros trabajadores, así como tampoco lo relativo a la facultad que se concede al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para determinar arbitrariamente qué empresas serán calificadas de pequeñas y medianas, y cuáles no, y los beneficios que eventualmente se otorgarían a unas y a otras, con el consiguiente campo de arbitrariedad que en este sentido también se abre con estas normas.

Nosotros rechazamos la valoración y el contenido del proyecto pues no ha de cumplir ningún objetivo positivo para quienes en este país trabajan y producen.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: coincidimos con quienes asignan a las pequeñas y medianas empresas un papel protagónico dentro de la actividad productiva del país. Entiendo que hay dos elementos favorables que deben señalarse.

En primer lugar, en determinadas áreas de la producción —no en todas— las pequeñas y medianas empresas pueden eliminar los altos costos burocráticos que deben afrontar las grandes empresas, y por esa vía su actividad económica puede ser más eficiente. En segundo término, la pequeña empresa produce una dispersión en el capitalismo, con todos sus beneficios sociales, lo cual significa que muchos más productores tengan pequeñas porciones de capital y que éste no esté concentrado en grandes titulares.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Natale. — Sería descabido mantener un extenso y serio debate sobre la conveniencia o inconveniencia de que el Estado adopte algunas medidas para estimular o tutelar el funcionamiento de este tipo de empresas, y seguramente en ello encontraríamos posiciones contradictorias. No rehuiríamos ese debate e incluso nos inclinariamos a sugerir la conveniencia de que por medio de los instrumentos de los que el Estado eventualmente pueda disponer, se trate de estimular o fomentar este tipo de actividades. Por ello no nos oponemos a la consideración global que contiene el proyecto de ley. Sin embargo, los tres títulos que conforman este proyecto adolecen de graves deficiencias.

El primer título del proyecto de ley se refiere a las medidas de estímulo para las pequeñas y

medianas empresas. En él se incluye un conjunto de disposiciones genéricas que sólo servirán para ahondar más los venenitos de la burocracia de nuestro país con las consecuencias negativas que ello implica.

Además, como elemento caracterizante de la iniciativa se ha fijado una disposición que prevé el otorgamiento de subsidios estatales a los créditos que tomen las pequeñas y medianas empresas.

Esta disposición podría significar una definición política de importancia a la que no nos opondríamos. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que en un par de horas se hará presente en el recinto el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos quien nos explicará cómo recortará los gastos del presupuesto nacional a fin de que cierren las cuentas que aparecían equilibradas el año pasado al momento de discutirse el presupuesto, pero que a dos meses de aquella sanción deben ser reformuladas. Seguramente el señor ministro también nos pedirá que votemos nuevos impuestos porque los recursos ordinarios que pensaba recaudar son insuficientes para atender los gastos del Estado.

Ante esta grave situación —la más crítica desde que el 1º de abril de 1931 se puso en vigencia el plan de convertibilidad—, ¿con qué recursos el Estado va a subsidiar el crédito de las pequeñas y medianas empresas? Por ello considero que debemos ser sinceros y decir las cosas tal como son: no hay recursos para atender los gastos ordinarios del Estado; por lo tanto, resultará imposible contar con fondos para las PYMES.

Por supuesto, adelanto que votaremos afirmativamente el proyecto en consideración, pero estamos convencidos de que no existirán los mencionados subsidios porque no se cuenta con los recursos respectivos.

El segundo título del proyecto contiene una singular construcción jurídica referida a las sociedades de garantías recíproca. Por este motivo se debió innovar todo el régimen de sociedades comerciales a efectos de crear esta figura. Espero que funcionen los mecanismos previstos en el proyecto, pero mucho me temo que jamás lleguen a concretarse. Todas las previsiones incluidas en el proyecto difícilmente puedan materializarse entre otras razones, por la incertidumbre que significa aglutinar a todos los socios protectores de las sociedades de garantía recíproca.

El tercer título del proyecto es el que ha recibido mayores comentarios y cuestionamientos; inclusive ha provocado que todos los me-

dios de comunicación se refieran a la presente iniciativa como la ley de flexibilización laboral de las PYMES. Sin embargo, si analizamos los artículos que contiene el presente título advertiremos que la mentada flexibilización no va más allá de admitir que en lugar de en dos cuotas semestrales el aguinaldo pueda hacerse efectivo en tres pagos y que el preaviso se compute a partir del día en el que se manda el respectivo telegrama y no desde el primer día hábil del mes siguiente como lo establece la ley de contrato de trabajo.

Considero que no se han realizado demasiadas modificaciones al régimen ordinario laboral de nuestro país. Por el contrario, se adopta un criterio cuestionable ya que no encuentro razón alguna para que los trabajadores de una pequeña o mediana empresa cuenten con un régimen laboral distinto al del resto de los trabajadores. De esta manera se crea una desigualdad cuya causa sustancial no se percibe claramente.

Estamos dispuestos a contribuir para modernizar la legislación laboral, pero teniendo en cuenta todo el contrato de trabajo en lugar de circunscribir las modificaciones a los contratos que celebren determinadas empresas.

En síntesis, esta ley no va a resolver ninguna cuestión; no es otra cosa que una expresión de buenos deseos. Quizás introduzca algunas prácticas diferentes en la relación laboral, pero éstas de ninguna manera van a modificar sustancialmente la situación existente hasta el día de la fecha.

Se debe tener en cuenta que el problema del desempleo es soportado por nuestro país y por el mundo, que es algo generado por la revolución tecnológica a la que asistimos y que se distribuye en todos los ámbitos del planeta. Esto se añade a la necesaria transformación que estamos haciendo de la vieja economía dirigista, centralizada, inflacionaria y estatizada que soportamos durante tantos años, hacia una economía libre como la que está tratando de transitar ahora la República Argentina.

No creo francamente que todos estos problemas se resuelvan por la vía de una modificación como la que aquí se inyecta respecto de la legislación laboral.

El proyecto de ley en consideración constituye una legislación general que deja sin definir lo más importante de la cuestión, que son las pequeñas y medianas empresas. En efecto: el artículo 2º del proyecto que estamos tratando encomienda a la autoridad de aplicación —vale decir, al Poder Ejecutivo— definir las carac-

terísticas de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diversos sectores de la economía en que se desempeñan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, que se refiere específicamente a la relación de trabajo. El artículo 83 exige cuarenta empleados como máximo y una facturación anual que no supere los tres millones de pesos para la aplicación del título laboral a las pequeñas empresas. Todo lo demás —lo referido a los títulos I y II, sobre subsidio estatal y sociedades de garantía recíproca— quedará en manos de lo que resuelva la autoridad de aplicación.

En consecuencia, lo que la ley debió definir como cuestión fundamental, que es el concepto de pequeña y mediana empresa a las que se dará un tratamiento especial, queda sin puntualizar y sometido al criterio del Poder Ejecutivo o, en última instancia, a la resolución que adopte el Ministerio de Trabajo.

Todas estas razones nos llevan a cuestionar el proyecto de ley en consideración, que en definitiva no va a modificar la situación actual de nuestras pequeñas y medianas empresas, dejando lo que era una expectativa que razonablemente podía tenerse sobre el particular.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Pellin. — Señor presidente: he pedido la palabra a los efectos de fijar nuestra posición respecto del proyecto de ley en consideración.

Entendemos que existen aspectos positivos en esta iniciativa, especialmente los descritos en el título I, que lamentablemente —como han dicho algunos señores diputados proponentes— tiene mucho de voluntarismo y poco de viabilidad, o quizás necesita que esto sea transcrito en una norma que tenga el poder coercitivo de una ley. Incluso muchos de esos principios o prescripciones ya están pasados de moda o fuera del momento histórico que la situación económica y financiera del país está viviendo. Me refiero concretamente a aquello a lo que recién aludía el señor diputado Natale, a los subsidios del Estado y a lo que podríamos denominar —y que figura en la ley— modificaciones a las tasas de interés, cuando ni antes ni durante la vigencia de la ley —por la situación que estamos viviendo— ni después podemos tener la seguridad de que dichas modificaciones realmente se produzcan. Sin embargo tenemos que rescatar en este primer punto el hecho de que aparezcan las PYMES dentro de lo que es el sistema grande de la situación económica del país.

Pero desde la posición de las economías regionales tenemos que decir algunas cosas que ni aun en el título I están mínimamente bosquejadas. Concretamente me refiero a la distribución espacial de estos beneficios.

Si bien se habla de polos productivos, más allá del voluntarismo que este término encierra en sí mismo, lo que podemos decir quienes vivimos en provincias donde se han privatizado las viejas empresas públicas, es que se ha terminado copiando viciosamente el sistema centralizado que originariamente tenían. Es decir, todo lo que hay que comprar se demanda en la ciudad de Buenos Aires o en el litoral. De manera que, con estas privatizaciones, en la Patagonia no nos han quedado verdaderos ejes económicos.

En consecuencia, más allá de la cantidad de organismos que se prevén a los efectos de promocionar las PYMES, entendemos que, si hay una voluntad real y concreta de sacarlas adelante, no es necesaria la sanción de una ley sino la instrumentación de programas a lo largo y ancho del país, en los que se ponga de manifiesto esta voluntad, propendiendo a la creación de pequeñas y medianas empresas alrededor de las grandes, dando así una dimensión al desarrollo que todos los argentinos añoramos.

El título II se refiere a las Sociedades de Garantía Recíproca. Si bien no existe experiencia en el país respecto de este tema, como lo indica el título esto no es otra cosa que una garantía para que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al crédito. Sin embargo, adviértase que los socios promotores de estas organizaciones, que seguramente serán los bancos, se verán beneficiados por una exención en el impuesto a las ganancias que es coparticipable. Por lo tanto terminarán cediendo las provincias sin haber sido consultadas. Si se quería disponer de recursos que legítimamente pertenecen a las provincias entregándoselos a estos beneficiarios, que después de todo hacen un negocio financiero más, mínimamente debió haberseles consultado.

Finalmente, el título III es el que se refiere a la flexibilización laboral. Advertimos que el gobierno insiste en buscar la promoción del empleo por el lado de la precarización del salario y la pérdida de los beneficios adjuntos a él. Ni la flexibilización laboral ni el crecimiento del país en los últimos años han podido resolver el problema de generar mayor empleo.

En este sentido creemos que el gobierno no está atendiendo a los fenómenos estructurales

del desempleo, entre los cuales destaco la promoción de la ciencia y la tecnología, que en ningún momento se ha preocupado en desarrollar. Es más: estamos a punto de sancionar dos leyes que de alguna forma crecen dos áreas fundamentales del avance de la ciencia y la tecnología en la Argentina: la biotecnología, a través de la sanción de la ley de patentes, y la energía nuclear, con la privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desmantelándose así una de las instituciones que más ha hecho por el desarrollo de esta tecnología de punta en la República Argentina.

Si le queremos encontrar la vuelta al tema del desarrollo, tenemos que pensar que por el solo hecho de ser ensambladores de lo que venga de afuera no vamos a resolver el tema del empleo. Debemos hacer hincapié en todo lo que la Argentina tiene por tradición y por historia; debemos apuntar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, por lo menos para tener algún grado de autonomía en la decisión de nuestro destino como país.

De manera que, en función de estos argumentos, dejo sentado el fundamento de mi voto negativo para este proyecto del Poder Ejecutivo.

Dr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Dr. Figueroa. — Señor presidente: esta iniciativa tiene un nombre atractivo pero también disposiciones difusas peligrosas y de muy mala técnica legislativa. Y digo que son difusas porque ya se señaló —por si hiciera falta repetirlo— que aunque el primer título supuestamente está destinado a la promoción de las PYMES, no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones. Decir, por ejemplo, que la bonificación en la tasa de interés se atenderá con el crédito presupuestario es ignorar el estado fiscal que hoy vive el país y que comienza a advertirse con las durísimas medidas del pasado 27 de febrero, sobre lo cual hablaremos dentro de un momento con el señor ministro de Economía.

Esto significa que sólo se trata de teorización, es decir, algo imposible de llevar a la práctica. Sin ir más lejos, hace un tiempo cargamos a este deficitario presupuesto rubros tan importantes como la movilidad jubilatoria, el pago de los juicios previsionales, el apoyo a las cajas provinciales deficitarias, etcétera. Y ahora aparece este nuevo rubro que evidentemente será de cumplimiento imposible.

En lo demás se trata de teorizaciones, que en la práctica no se dan. Porque el productor, el industrial o el comerciante de una PYME que

llega a un banco para pedir un crédito, de aquellos que hemos visto mencionados muchísimas veces por la prensa, recibe la respuesta del gerente de que no hay plata; y si la hay, le piden tal cúmulo de garantías que el crédito resulta absolutamente intomable. Prácticamente lo que aquí se pretende no se da, y tampoco se advierte ningún tipo de medidas sobre el tema de las garantías ni sobre las cuestiones fiscales, tan largamente reclamadas por las agrupaciones que reúnen a las PYMES.

Por otra parte se advierte una superposición de organismos que buscan lo mismo y que en definitiva significará una muestra más de la burocracia. Me estoy refiriendo a los artículos 12 y 27, que crean dos organismos distintos que en la práctica buscan lo mismo, que es la información y el catálogo de las PYMES. Evidentemente esta repetición tampoco ayuda.

En lo que respecta a las Sociedades de Garantía Recíproca la organización en concordancia con la sociedad anónima tampoco significa una solución. Es una nueva manera de burocratización que hará que todo resulte más difícil.

Cuando leemos estos dos títulos advertimos una inédita y muy curiosa manera legislativa. Me estoy refiriendo a los artículos 81 y 82 pues debe ser la primera vez —por lo menos dentro de lo que conozco— que en medio de una ley aparecen una derogación y una remisión. En la práctica legislativa estas disposiciones suelen estar en el penúltimo artículo, previo al de forma.

Esto me lleva a afirmar que los títulos II y III son injertos hechos con posterioridad a los bellos principios del título I. Y eso es así porque se siguió al pie de la letra el proyecto de ley que sobre el tema elaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que tengo a la vista.

Cuando llegamos al título III, referido al tema laboral y la llamada flexibilización, se advierte que también aquí hay un peligro enorme. En el año 1991 una resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos decía que las PYMES eran aquellas empresas de hasta trescientas personas. En la actualidad este proyecto habla de hasta cincuenta para la pequeña empresa, lo que indica claramente el proceso de achicamiento de todas las empresas. Así llegamos a la conclusión cierta de que este país tiene no menos del 60 o 70 por ciento de actividad industrial y agrícola en general catalogado como PYME.

Si en esta norma estamos introduciendo disposiciones laborales, con ese porcentaje ello significa que estamos legislando para la mayoría y no para la excepción. En todo caso de-

bieron armarse dos proyectos: uno relativo a las PYMES y otro con la cuestión de la flexibilización, donde pudiera discutírsela en profundidad y no escondiéndosela, como ocurre con este bien intencionado pero inocuo proyecto que estamos tratando.

Por las razones expuestas anticipo mi voto negativo, en el entendimiento de que no se resuelve con esta norma la cuestión de las PYMES y que la flexibilización laboral pasa a ser una regla y no una excepción. A las PYMES no les hacían falta tanta leyes sino dispositivos reales de fomento con los cuales las podríamos haber rescatado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Polo. — Señor presidente: el bloque del Movimiento Azul y Blanco va a votar negativamente el proyecto de ley en consideración, que seguramente aprobará la Cámara.

Nos oponemos totalmente tanto al dictamen de mayoría como al de minoría, porque nada ni nadie van a garantizar que existan fuentes de trabajo; nada ni nadie van a garantizar la reconversión de nuestra pequeña y mediana industria y menos aún, la recuperación de nuestras economías regionales que hoy están destruidas. Mientras persista este modelo de achicamiento y de ajuste que nos impone el plan de convertibilidad —que tiene su sustento en la falta de consumo o en su restricción— nada está garantizado.

El proyecto sólo constituye una serie de importantes expresiones de deseos. Con humildad y respeto por quienes opinan lo contrario, debo decir que tiene fines electorales. Significa una abusiva concentración de poderes en el ministro de Economía e introduce nuevos intermediarios en el circuito financiero, con lo que no se va a solucionar la falta de crédito, que constituye el problema real de la economía y de las pequeñas y medianas industrias.

Hago mios los conceptos vertidos por los señores diputados Natale, Pellin y otros que me precedieron en el uso de la palabra.

Al igual que cuando se trató el proyecto de ley de solidaridad previsional y el vinculado con la flexibilización laboral, nos vemos en la obligación de expresar que, así como en aquellas oportunidades se tomaron como rehenes del gobierno a nuestros jubilados, hoy se van a tomar como rehenes de una parte del empresariado y del gobierno a la masa de trabajadores argentinos.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: ante todo he de expresar que, si bien coincido con los títulos I y II del proyecto de ley en consideración, tengo algunas diferencias con respecto al título III.

En estos días en los que se habla del "efecto tequila" y ahora del "efecto caipirinha", voy a hablar de un efecto anterior: el "efecto chicha". Para quienes no conocen la chicha debo decir que se trata de una bebida popular que se elabora artesanalmente en el Noroeste argentino. El "efecto chicha" es anterior al "efecto tequila" y al "efecto caipirinha". Se trata de un efecto que se viene produciendo en nuestras economías regionales por la falta de inversiones y por las altas tasas de interés.

Quince días atrás el presidente del Consejo Argentino de la Industria, Rolando Pietrangeli, declaró que las empresas multinacionales tienen acceso al crédito externo a tasas internacionales, que las grandes empresas nacionales podían tomar el crédito interno a una tasa del 40 por ciento —reitero que esto era quince días atrás, ahora es del 50 por ciento—, mientras que para las PYMES las tasas eran del 80 al ciento por ciento. ¿Cómo van a crecer estas economías con esas tasas de interés? Es imposible que una actividad sea rentable con ese nivel de tasas.

En el marco de este "efecto chicha" —que, reitero, es anterior al "efecto tequila" y al "efecto caipirinha"— nosotros venimos observando en las provincias del Noroeste que los créditos debían tomarse a tasas del 40 por ciento inclusive antes de que se produjeran todas estas circunstancias internacionales. Se pagaban estas tasas por los créditos que se conseguían, porque lo cierto es que pocas eran las posibilidades. Se trata de carteras muy chicas y exigentes, y el Banco de la Nación Argentina, que debería ser un banco de promoción, tampoco hace llegar estos créditos al Noroeste argentino. Es verdad que también existe la banca privada, pero ésta se ha convertido en oficina de recomendación de los fondos de los depositantes del interior.

Debemos agregar a todo esto los altos costos de los fletes. Por ejemplo, para ser más precisa, transportar alcohol desde Jujuy a Buenos Aires cuesta más caro que trasladarlo desde Buenos Aires a Tokio vía Canal de Panamá. Esto demuestra que ésta es una situación que ya no puede continuar así, máxime si tenemos en cuenta los altos costos de la energía.

Antes de la privatización de Gas del Estado, en una reunión que se celebró en mi provincia con los gobernadores, los legisladores, las fuerzas del trabajo y la producción de todo el Noroeste argentino, se nos aseguró que íbamos a tener el gas más barato. En realidad hoy en nuestras provincias el gas es más caro.

¿Qué produce este "efecto chicha"? Motiva que en Jujuy se haya reconocido oficialmente que la desocupación es del 23 por ciento; un verdadero escándalo. Esto también tiene su correlato en el ámbito social porque, según cifras oficiales de 1994 elaboradas sobre bases de 1993, el 18,6 por ciento de la población tiene discapacidades. En la mayoría de los casos se trata de discapacidades mentales; y esto se llama carencia de proteínas, hambre y falta de posibilidades de educación. Esto significa que se ha dejado en el desamparo a todo el interior.

No es nuestra intención obstruir las grandes políticas económicas, pero sí debo expresar que tengo la certeza de que el país no va a crecer en la medida en que las provincias no puedan tener un desarrollo armónico y sostenido.

Celebro lo que se dispone en el Título I sobre la financiación, pero me parece que simplemente se trata de una expresión de deseos. Ojalá que me equivoque y que esto sirva para que se reflexione. Sabemos que las provincias han dejado de interesar desde el punto de vista electoral porque, según el nuevo texto de nuestra Constitución Nacional, ya no existen los electores. Por eso pido a los señores diputados que reflexionemos para proteger también la paz social en nuestras provincias.

Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué no pensamos en las diferenciales entre las zonas geográficas y las situaciones sociales? Con las cifras que di —23 por ciento de desocupación y 18,6 por ciento de la población que se encuentra con discapacidades— no podemos seguir pensando que las diferenciales que se fijan se denominen subsidios. No pedimos subsidios sino diferenciales para poder competir con nuestros costos de flete, para tener energía más barata, para tener reintegros a la exportación de los productos que sacamos de nuestra tierra hacia Chile por los pasos cordilleranos del Noroeste. En este sentido lo que solicitamos es un reintegro del 20 por ciento, que no es alarmante. Queremos que el 20 por ciento que se dio para los caramelos se otorgue también para nuestros minerales, nuestra azúcar y nuestro tabaco.

En realidad los títulos I y II pueden quedar en una expresión de deseos. Debemos analizar

cuál es la realidad del país. Miremos a ese país que quiere producir y tener cifras para poder exhibir, no como la vergüenza nacional. En la medida en que esto sirva sólo de reparación histórica al conurbano bonaerense o al de Santa Fe —debemos decirlo de una vez por todas—, seguiremos dividiendo el país y postergando a gran parte de nuestra población.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Digón. — Señor presidente: cuando se analiza un proyecto de ley como el que nos ocupa, quienes pertenecemos al campo del trabajo tenemos en cuenta su objetivo. En este caso se pretende reducir los costos laborales. Tendríamos que considerar también cuáles son los costos generales que tienen las PYMES. Así llegamos a la conclusión de que éstas no cuentan, por ejemplo, con los créditos blandos que pedimos reclamando desde distintos sectores de la sociedad. Los servicios —como lo expresó anteriormente la señora diputada Guzmán— son de los más caros del mundo.

Otro aspecto que nos hubiera gustado que se incluyera dentro de esta norma es el de la compensación; es decir, cuál es el compromiso de los empresarios con respecto a esta flexibilización laboral que venimos planteando desde hace tres o cuatro años a través de los convenios colectivos o de distintas leyes.

Lamentablemente la desocupación ha crecido. Quiero comentar una anécdota que no pertenece a las PYMES. Me refiero a cómo llegan estos grandes grupos empresarios a trabajar con los supermercados: en general se ubican alrededor de grandes ciudades, van a visitar a la municipalidad del lugar y a la Dirección de Trabajo de turno y solicitan que les aprueben rápidamente los planos y las formas de trabajo; si no lo consiguen, amenazan con ir a otro distrito.

A partir de ese momento observamos la aparición de trabajadores indocumentados, lo que ha sido denunciado por el sindicato de la construcción. Se trata de trabajadores hermanos provenientes de países vecinos, a quienes se les pagan salarios indignos. Así en seis meses se construyen grandes supermercados. En los fundamentos se dice que se crean más fuentes de trabajo, lo que es verdad: ingresan 400 o 600 seres humanos con quienes se firman contratos por seis meses; si después no gustan, se los despide. Finalmente podemos comprobar cómo las góndolas de esos supermercados están ocupadas en un 60 por ciento por artículos importados.

Entonces se plantean las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este organismo —lo saben los señores diputados— tiene una dotación de cinco personas para controlar el interior del país. Muchas veces esas personas no cuentan con un vehículo para transportarse; si lo tienen, no se les provee la nafta para que funcione. En muchas ocasiones el combustible lo tiene que pagar el denunciado o el empresario que está a cargo del lugar en el que se encuentran los trabajadores que denuncian la explotación que se realiza.

En muchos países europeos no ha servido esta flexibilización. Las naciones que no adoptaron esta flexibilización presentan una gran productividad, mejores salarios y una mayor calidad de los bienes que producen. Podemos observar cómo uno de los principales candidatos presidenciales de Francia plantea —al igual que otros países de Europa— la reducción de las horas semanales de trabajo para combatir la desocupación.

Por lo tanto algunos planteamos que para salir de esta situación se debe contar con una política industrial. Es necesario reactivar el aparato productivo. Hay que disponer otras reglas de juego para que nosotros, los trabajadores, también planteemos la flexibilización.

En resumen, esta iniciativa es injusta y perjudica a los trabajadores, por lo que voy a votar por la negativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: por esas raras coincidencias del destino y de la historia este debate se realiza el 8 de marzo, que es el día en que se conmemora el fallecimiento por incineración de más de cien trabajadoras en una fábrica textil de los Estados Unidos.

Estas mujeres se inmolaron en la lucha por la conquista de las ocho horas diarias de labor. Hoy —fecha en la que se recuerda internacionalmente el esfuerzo y el sacrificio de esas nobles mujeres— la mayoría va a votar en la Cámara de Diputados un proyecto por el que se eleva la jornada de trabajo hasta doce horas diarias. Este es un gran contrasentido histórico. Todavía no sé cómo el oficialismo se atreve a hacer actos públicos en conmemoración de esta gesta histórica que recuerda el sacrificio de esas mujeres y el ejemplo que dieron al mundo en su lucha por una sociedad mejor.

Mi compañero de bancada, el señor diputado Estévez Bocro, fijó la posición de nuestro bloque y fundamentó nuestro voto negativo para este proyecto de ley que, con el pretexto de favorecer el desarrollo de las PYMES y reducir los

altos índices de desocupación, en definitiva va a anular lo conseguido durante un siglo de luchas de los trabajadores argentinos y de todos los sectores políticos para conquistar leyes que protegieran al trabajo, para que no fuera considerado como una mercancía, superando la concepción individualista del Código Civil que establecía la igualdad de derecho ignorando las profundas desigualdades de hecho existentes en la relación laboral.

He pedido la palabra para ocuparme de algunas cuestiones que hasta ahora no se han señalado y que complementan las magníficas exposiciones que hemos escuchado de parte de legisladores de diverso pensamiento político que han coincidido en que este proyecto no va a resolver el problema que preocupa al señor ministro de Economía y al presidente de la Nación sino que, por el contrario, lo van a agravar aún más. Si tanto preocupa el problema de la desocupación de los trabajadores argentinos, me pregunto por qué se tolera que las empresas privatizadas en el área de los servicios públicos estén contratando personal europeo para hacer tareas que durante décadas vinieron desarrollando trabajadores argentinos. Además, a los europeos contratados se les paga salarios que oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares mensuales.

Para conocimiento de la Cámara me permitiré leer un aviso publicado en el diario "País" de España, el domingo 8 de septiembre de 1991, en el que se solicitan profesionales para una empresa multinacional de ingeniería y construcción de la República Argentina. Dice así: "Tectint, importante organización de reciente implantación en España, solicita para sus operaciones en la República Argentina, especialistas técnicos en plantel exterior de telefonía para incorporarse a un grupo técnico de alto nivel. Ingenieros de proyectos. Se responsabilizarán de la ejecución y supervisión de proyectos de plantel exterior (ingeniería básica y detalle). Para este puesto será necesaria la titulación de ingeniero superior o técnico de telecomunicaciones o industrial, con una experiencia probada de instalaciones de infraestructura externas de telefonía. Ingenieros de coordinación. Coordinación operativa para la realización de contratos en obras de plantel exterior, mantenimiento y privatización. Es imprescindible titulación de ingeniero superior o técnico de telecomunicaciones o industrial, y amplia experiencia en funciones similares. Empalmadores...". Si no fuera por la titulación del término de mi exposición, leería íntegramente esta solicitud. Es una vergüenza que nuestro embajador en España no haya comunicado esta situación a las autoridades ar-

gentinas, y si lo ha hecho, es vergonzoso que las autoridades argentinas no hayan tomado cartas en el asunto, pues estos trabajadores europeos han venido a quitar los puestos de trabajo a los obreros argentinos.

La ex ENTEL dejó en la calle a más de 13 mil operarios sobre un plantel de 41 mil trabajadores que existían al momento de la privatización. Las empresas contratistas y subcontratistas vinculadas...

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Señor diputado Polino: el señor diputado Lafalla le solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia.

Sr. Polino. — Con mucho gusto, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Lafalla. — Señor presidente: he escuchado con atención las palabras vertidas por el señor diputado Polino, pero quisiera que precisara en qué artículo del proyecto de ley en tratamiento se dispone que la jornada de trabajo se extenderá de 8 a 12 horas, como él ha señalado.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: se halla en todo el contexto del proyecto de ley: el empleador tiene la facultad de elevar la jornada de trabajo. El señor diputado tendría que leer más detenidamente el proyecto para advertir que esto es así.

Tengo sobre mi banca una nota que la empresa Telsys S.A. envió a la empresa Telecom, en la que da cuenta de la cantidad de empleados extranjeros que ha tomado en la planta permanente. Allí también se hace referencia a la cantidad de horas que demandará la contratación: 180 mil horas hombre físicas mensuales. Esto también ha contribuido a aumentar la desocupación en nuestro país.

Dispongo de otra nota, en este caso de Sintelar S.A., —que pertenece a la empresa Telefónica de España—, en la que se establece la cantidad de horas y las remuneraciones que van a percibir esos trabajadores europeos. Por ejemplo, para la Capital Federal, centro, oeste y sur del país, se estima en concepto de remuneraciones la suma de 36.743.000 dólares norteamericanos, y para la provincia de Buenos Aires se estiman 3.663.000 dólares mensuales. Estas remuneraciones que las empresas contratistas vinculadas a la Telefónica de Argentina y a Telecom establecen para los obreros europeos,

han contribuido a aumentar el déficit ocupacional que existe en la República Argentina.

Frente a ello, ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ni el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se preocuparon por ver qué estaba ocurriendo con este tema que tanto ha perjudicado a los trabajadores de nuestro país.

También se reglamentó lo atinente a los materiales importados a utilizar por las empresas que se hicieron cargo de los servicios públicos. Por ejemplo, en el capítulo XV —denominado Política Industrial— del pliego de licitación de ENTEL aprobado mediante el decreto 62/90 se establece la prioridad de adquirir materiales y equipos de producción nacional cuya integración variará entre el 40 y el 60 por ciento, según el segmento de producción pertinente, de acuerdo con las pautas de integración a fijar por la autoridad regulatoria.

Sería importante que cuando se haga presente en el recinto el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos explique de qué manera se ha cumplido con lo establecido en el pliego mencionado.

Asimismo, en el capítulo XV del referido pliego y en lo atinente a la compra de bienes, obras y servicios que realiza la sociedad licenciataria se fija que se otorgará una preferencia en favor de la industria nacional instalada al momento de la provisión del 10 por ciento en el marco previsto por el artículo 23 de la ley 23.697. ¿Por qué en este caso se previó un porcentaje tan reducido de participación de la industria nacional en la provisión de los equipos y materiales necesarios? Seguramente de haberse aumentado ese porcentaje la industria nacional habría tenido una mayor reactivación y, en consecuencia, una mayor ocupación de los trabajadores argentinos.

Si es cierto que el oficialismo está tan preocupado como dice en la generación de puestos de trabajo productivos, ¿por qué razón el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente de la República y de los ministros Cavallos y Caro Figueroa, aprobaron el 14 de noviembre del año pasado el decreto 2.015 por el que se eliminan las cooperativas de trabajo en el área de los servicios? Seguramente actuaron así como consecuencia de la presión que ejercieron algunas cámaras empresarias vinculadas con actividades lucrativas para, de esa forma, matar a estas pequeñas y medianas empresas.

Los fundamentos que avalan el mencionado decreto hablan de —aunque parezca una iro-

nía— hacer cumplir la legislación laboral o evitar el fraude laboral.

Todos sabemos que las cooperativas de trabajo no tienen personal en relación de dependencia puesto que el trabajo y el capital se funden en una misma cabeza, por lo cual se suprimen las antinomias existentes en las empresas capitalistas donde el trabajador es un asalariado. No olvidemos que estamos hablando de entidades autogestionarias, no obstante lo cual la Dirección General Impositiva —en una verdadera actitud persecutoria— estableció las pautas a las que deben atenerse los inspectores para verificar si una cooperativa es auténtica o no. Por ejemplo, fija que si reciben órdenes de las autoridades de la entidad, se está frente una cooperativa no auténtica. ¿Qué pretenden? ¿Que sean entidades anárquicas, que funcionen sin ningún tipo de disciplina? Si establecen horarios y pautas de trabajo, estamos para la DGI ante el fraude cooperativo. ¿Desde cuándo les ha surgido a las autoridades del área de Economía la idea de vigilar la pureza de la doctrina cooperativa? En el fondo de lo que se trata es de anular entidades testigo que regulan la actividad económica y hacen más transparentes los mercados y la competencia. Estas entidades no tienen fines de lucro y sus trabajadores ganan dos y tres veces más que los que realizan tareas similares en empresas dedicadas a la actividad comercial.

Lo que aquí está claro es que con ese decreto no se busca fomentar el empleo porque va a provocar más desocupación. Se va a llevar a la desocupación a miles de trabajadores que hoy no le ocasionan ningún problema al gobierno, que no le piden ninguna ayuda y que se autogestionan, habiéndose constituido la mayoría de estas empresas para hacer frente precisamente a la desocupación.

En vez de estimular al cooperativismo de trabajo, ahora se dicta este decreto y aparecen normas de la Dirección General Impositiva que no sirven para perseguir ni controlar a los verdaderos grandes evasores que existen en el país sino a pequeñas empresas de la economía social.

Hemos presentado un proyecto de ley que espero que sea recogido con la misma celeridad con que la comisión ha aprobado el dictamen que estamos considerando. Se trata de un proyecto de ley que deroga el decreto 2.015 en virtud de que lo único que va a provocar será un aumento de los índices de desocupación existentes en el país.

Esta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo ensaya ofensivas contra las cooperativas de trabajo. Alguien podría suponer que éste ha

sido un descuido momentáneo o un error que seguramente están dispuestos a subsanar, pero no es así. Esta es una política coherente y reiterativa porque el inciso 2) del artículo 3º del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo el 19 de agosto de 1993 —iniciativa por la cual se propiciaba la reforma al régimen de contrato de trabajo— creaba una figura que colocaba fuera de juego a la totalidad de las cooperativas de trabajo. Esa norma decía: "Para los asociados de las cooperativas de trabajo mencionados en el punto anterior, regirán las normas imperativas de la presente ley y del convenio colectivo de trabajo que sean de aplicación a los trabajadores en relación dependiente de la actividad en la que cumplan sus tareas."

Todos sabemos que las cooperativas de trabajo no tienen personal en relación de dependencia. Esto es tan claro que la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara en su momento desechó esa iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a ahogar el cooperativismo de trabajo. Como no lo pudo hacer en aquella oportunidad se buscó ahora este decreto y esta vía para atacarlo por otro frente.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — La Presidencia informa al señor diputado que le restan tres minutos de su tiempo.

Sr. Polino. — Quisiera que se me concedieran unos minutos más...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Polino. — Quisiera que se me concedieran minutos. Tienen oportunidad para hacer uso de la palabra y refutar todo lo que estoy diciendo, si es que no es cierto; pero no teman el debate.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Lo mismo sucedió con el impuesto a las ganancias de las cooperativas. En el proyecto de solidaridad previsional se estableció ese gravamen, pero con buen criterio las comisiones de esta Cámara no lo aceptaron. Recuerdo al diputado Lamberto haberme interrumpido en una oportunidad cuando yo me estaba refiriendo a este aspecto. Me dijo que me quedara tranquilo que la comisión no iba a aceptar esa pretensión del Poder Ejecutivo; y efectivamente no se aceptó.

Pero resulta que ahora se ha enviado otro proyecto de ley y de acuerdo a lo que me acota

el diputado Molinas esa misma comisión, con los mismos integrantes, acaba de aceptar finalmente el criterio del Poder Ejecutivo estableciendo el impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales.

Sr. Lamberto. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Polino. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: el señor diputado Polino se vuelve a equivocar. Esta mañana emitimos un dictamen en el que las cooperativas están exentas. No sé de dónde saca lo que está diciendo: o se informa mal o no lee los despachos.

Sr. Polino. — Me lo acaba de decir el señor diputado Molinas.

Sr. Lamberto. — Lo ha leído mal.

Sr. Polino. — Sería interesante entonces que me acercaran una copia, porque el señor diputado Molinas me merece la más absoluta confianza por su seriedad. Además integra la comisión que formuló el dictamen.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Lamberto. — Los dictámenes son públicos y están a disposición de los señores diputados en la sede de las comisiones.

Como los diputados nos merecemos respeto, cuando alguien afirma un hecho de esta naturaleza lo menos que se puede pensar es que se está informado bien. Todo figura en los Diarios de Sesiones o incluso se difunden las noticias por los periodistas.

Si los fundamentos del señor diputado Polino revisten esta seriedad, entonces tengo derecho a dudar de la credibilidad de sus palabras, y esto sería grave para el Parlamento.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: lo que le hace mal al Parlamento no es esta exposición sino otras cuestiones y otros comportamientos que nada tienen que ver con este tema. Estoy aludiendo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que se refiere, insisto, al reestablecimiento de este impuesto. Si hubo un cambio en la comisión, me alegro de que así haya sido y espero que el Poder Ejecutivo no viole preceptos de la Constitución Nacional, ya que existen cuatro excepciones donde aquél no pue-

de legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.

Sra. Guzmán. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Polino. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: los dichos del señor diputado Polino y la respuesta del señor diputado Lamberto evidencian que aquí se está queriendo tratar un proyecto del que ni siquiera tenemos en las bancas un ejemplar del dictamen definitivo. Por eso solicito a la Presidencia que adopte los recaudos necesarios para que podamos contar con este proyecto en nuestras bancas.

Sr. Lamberto. — Aclaro a la señora diputada que está equivocada, pues no se está tratando ningún proyecto que no esté en las bancas, seguramente se está refiriendo a una cuestión que recién vamos a considerar en una próxima sesión.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: de todas maneras resulta claro que el Poder Ejecutivo de ninguna manera propicia el fomento de las entidades cooperativas, que en su inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a obreros argentinos y reinvierten en el país los excedentes en nuevos y mejores emprendimientos. Ha existido una verdadera ofensiva que constituye una flagrante contradicción con el espíritu que nos quieren traer con este proyecto de ley para generar puestos de trabajo productivos.

Como el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra se me está agotando, quiero concluir recordando un artículo publicado el pasado 19 de febrero por la revista "Noticias". Se trata de un excelente trabajo del señor diputado Roberto Terragno. Es importante mencionarlo porque a través de él se demuestra que los directivos y gerentes de las grandes empresas argentinas tienen la remuneración, en salario de bolsillo más alta del mundo aunque proporcionalmente pagan los impuestos más bajos del mundo.

Sr. Camaño. — ¿Y eso qué tiene que ver con este proyecto?

Sr. Polino. — Tiene que ver mucho con este proyecto porque aquí se trata de aumentar la competencia, reducir costos, mejorar el mer-

cado interno, reactivar el aparato productivo y generar puestos de trabajo, y resulta que se lo hace castigando al sector más débil, el de los trabajadores. El gobierno tendría que recurrir a los sectores que más tienen.

Puedo citar cifras que son elocuentes y que no tienen ninguna ideología de por medio. En la Argentina un gerente o un directivo de una gran empresa ganan en promedio 330 mil dólares por año y pagan un impuesto de 122 mil, es decir, el 37 por ciento. En los Estados Unidos, en cambio, ganan 263 mil dólares anuales —es decir, 25 % menos que aquí— aportando en concepto de impuesto un 78 por ciento. En Suiza ganan 190 mil dólares por año —es decir, 73 % menos que en la Argentina—, aportando por impuesto el 88,62 por ciento. En Japón perciben 189 mil dólares al año —lo que significa 75 % menos que en nuestro país—, pero en cambio tributan el 78 por ciento. En Alemania perciben un salario que es 90 % menor al nivel de nuestro país, pero tributan el 97 por ciento; y en Francia ganan todavía menos, pero aportan el 88 por ciento.

En consecuencia, este proyecto no va a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas ni la de sus trabajadores, porque para ello hay que modificar sustancialmente la política macroeconómica, la posibilidad de acceso al crédito y las políticas arancelaria e impositiva.

Estos instrumentos que hoy se intenta poner en práctica han demostrado aquí y en todas partes del mundo ser totalmente ineficientes para resolver el problema de la clase media y el de los trabajadores.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Troyano. — Señor presidente: esta tarde quiero hablar a los diputados de mi partido. Voy a hacerlo teniendo como respaldo un desempeño de tres años en defensa de la posibilidad de desarrollo de las PYMES en nuestro país.

En este lugar al que mi pueblo me ha ungido he tratado de elaborar proyectos que implicaron la posibilidad de acceder al crédito por parte de las PYMES, procurando que el sistema sea participativo a través de un cuerpo federal, para que todo esto se organizara a nivel regional y de las provincias.

En estos años diferentes leyes —incluida la del fondo de garantía estatal para las PYMES— han sido vetadas por el Poder Ejecutivo.

Hoy, con profundo dolor ideológico, observo que el texto de este proyecto en consideración

consta de varios títulos. El primero es una expresión de anhelo para las PYMES; existe un segundo título que se refiere a la creación de las sociedades de garantía recíproca, lo que significará la existencia de institutos financieros que burocratizarán la posibilidad de las PYMES de acceder a los créditos; hay un tercer título, que es mucho más doloroso al oírlo, a la ideología y al testimonio de la historia vivida por quienes no por oportunismo sino por convicción, hemos abrazado a este Partido Justicialista. Nosotros tenemos, como una de nuestras máximas, la justicia social, y una de nuestras columnas está constituida por los trabajadores.

Más allá de los tecnicismos económicos lo cierto es que este proyecto de ley que aspira a ayudar a las PYMES, cuenta con 31 artículos destinados a dicha actividad y 51 referidos a la creación de sociedades de garantía recíproca, que importan una entidad financiera complicada, que en modo alguno soluciona el problema de aquéllas y sólo provee a los grandes productores un esquema según el cual ellos siguen siendo quienes deciden sobre los proyectos de desarrollo de las PYMES.

Durante las últimas semanas he tenido que soportar el calificativo de traidora, y en ese sentido quiero decir hoy que yo no he traicionado mi ideología en mi historia política ni voy a traicionar tampoco a la gente que sustenta mi representación en esta Cámara. Aclaro que yo no tengo un problema personal con el ministro de Economía, como se dice por allí. Allá él con sus tecnicismos y aquí yo con mi conciencia política.

Quiero decir a mis hermanos peronistas que el título III del proyecto de ley en consideración nada tiene que ver con los I y II; sólo es un título anexo, que si no existiera no modificaría en nada la posibilidad de dar empleo.

Asimismo deseo expresar a mis compañeros que de este modo nos estamos deshumanizando porque nosotros, los justicialistas, siempre hemos priorizado al ser humano y sobre todo al trabajador; nunca hemos antepuesto los intereses empresariales a los de las familias argentinas. Digo esto con profundo dolor porque durante tres años he trabajado por el desarrollo de las PYMES, que son las que van a sostener el desarrollo de este país, y no las grandes empresas especuladoras y oportunistas. Sin embargo, no se aceptó que se manejara en forma coparticipada con las provincias el otorgamiento de créditos destinados al desarrollo de aquéllas.

Hoy este proyecto de ley en consideración vuelve al origen pues propicia que el manejo de los créditos sea unipersonal —me refiero al

Ministerio de Economía— y que para poder acceder a los créditos las PYMES deban formar parte de una sociedad de garantía recíproca en la que los socios mayores —los grandes productores— serán los que decidan qué emprendimientos podrán acceder al crédito.

Considero que para ayudar a las PYMES no son necesarios los títulos II y III; ni siquiera el I, planteado en los términos en que está redactado. Sólo se requiere una reglamentación interna de protección desde el Estado y que el Banco de la Nación Argentina priorice el desarrollo de las PYMES para que se reactive genuinamente el aparato productivo de este país, que responde a aquéllas y no a las grandes empresas. Sabemos cuál ha sido la conducta de las grandes empresas durante todos los gobiernos y que las PYMES constituyen el genuino aparato productivo con que cuenta nuestro país.

Por ello hoy, más allá de los calificativos, quiero pedir a mis hermanos peronistas que no dejen cincuenta años de conquista de nuestros trabajadores en manos de un sistema que no garantiza el desarrollo de las PYMES. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: antes de comenzar con el análisis del proyecto de ley en consideración deseo hacer una breve reflexión. Previo al inicio de esta sesión se realizó una reunión de la que participaron el bloque Justicialista y las bancadas de los partidos provinciales y en la que se adoptaron decisiones. Al respecto debo señalar que sobre esta reunión no se avisó a ninguno de los tres partidos que integran el bloque del Frepaso. Es decir que ante una situación crítica, para resolver este tema se recurre a una relación bilateral en lugar de reconocer con humildad que para ello debería contarse con la ayuda de la mayor cantidad de sectores políticos.

Dejo planteada mi protesta en nombre de mi bloque ante una actitud que se viene repitiendo: me refiero a reuniones de fantasía de la Comisión de Labor Parlamentaria, cuando en realidad se resuelve en otros lugares cómo se van a tratar los temas en el recinto o se hacen reuniones parciales con motivos que no voy a entrar a imaginar. Creo que no se está trabajando de la mejor manera posible para solucionar los serios problemas que existen en el país.

Concretamente sobre el proyecto que hoy nos ocupa, no puedo menos que alegrarme —como muchos otros legisladores— de que aunque sea por este camino se estén preocupando por las PYMES,

A pesar de que se sostiene que con esta norma se pretende combatir el flagelo de la desocupación, todos sabemos que no es verdad. Por el contrario, en un momento como el actual en que estamos enfrentando una economía que provoca recesión, una norma que ocasione más precarización laboral y que en la práctica actúe como una devaluación económica y laboral va a traer menor consumo interno. Seguramente las PYMES se van a preocupar mucho más que las grandes empresas en situación de exportar.

Sugiero a los legisladores que reflexionemos, porque quizás cuando se planteó este proyecto de ley la situación económica no tenía la gravedad que hoy exhibe, si bien ya era crítica desde el último semestre del año pasado.

Todas aquellas medidas que convalidemos y que apunten a disminuir el consumo interno, es decir, a profundizar la recesión, no sólo castigan al sector de los trabajadores sino que van a precarizar a las PYMES.

Por si quedara alguna duda respecto de cuál es la visión que de los trabajadores hoy tiene el Ministerio de Trabajo —por los que dice preocuparse— existe un gesto que creo que fue simbólico: cobrar a los desocupados veinte pesos por la venta de un manual elaborado por dicho ministerio para que aprendan a buscar trabajo. Mucho más barato les hubiera resultado hacer la cola para obtener un suplemento del diario "Clarín"; no sé si esto estará dentro de las recomendaciones del manual *Lerú*.

Sr. Corchuco Blasco. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?

Sra. Fernández Meijide. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuco Blasco. — Si bien el manual puede considerarse un desacierto si solamente nos referimos a los desocupados con problemas, es un acierto si tenemos en cuenta que sirve para algunos temas. Además aclaro que aquel que no pudo adquirirlo puede encontrarlo en las bibliotecas y consultarlo gratuitamente, aunque esto no puedan hacerlo algunos que viven en el interior del país y lejos de la sede del ministerio. Me parece que no deberíamos centralizar el tema en ese punto porque ello implicaría disminuir el nivel de este debate, de esta discusión, que de por sí no es muy alto.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente; todos sabemos cuál es la práctica habitual del pueblo argentino en materia de concurrencia a las bibliotecas, sobre todo a las grandes que se concentran en las ciudades importantes. Este aspecto constituye un detalle y es meramente ilustrativo. Como bien dijo el señor diputado Corchuco Blasco, tal vez no sea lo más importante.

Me pregunto si realmente estamos pensando seriamente que las PYMES son capaces de absorber aproximadamente el 60 por ciento de la ocupación del país. Ellas son las más dinámicas en lo que atañe a la creación de puestos de trabajo, no solamente en nuestro país. En su momento el milagro italiano surgió del impulso que se dio a las PYMES.

Deberíamos imaginar un plan completo para dinamizar en serio a las pequeñas y medianas empresas. No estoy de acuerdo con una iniciativa que sí va a modificar —disiento en este punto con el señor diputado Natale— la situación existente en la sociedad argentina. Ello ocurrirá no sólo porque se va a precarizar el trabajo sino porque se abre la puerta para que la legislación termine extendiendo sus beneficios a las grandes empresas. La Unión Industrial Argentina ya ha promovido una demanda en este sentido, y desde el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ya ha habido un guiño para ello. Esto coloca el primer escalón hacia esa situación.

Estoy convencida de que las PYMES necesitan créditos blandos, que se apoyen en un sistema mixto, privado y público. Deben ser préstamos blandos adecuados a la producción de cada pequeña y mediana empresa. En las economías regionales el plazo de los créditos debe adecuarse al tiempo que lleva la transformación. En el caso de Mendoza y San Juan, por ejemplo, debe tenerse en cuenta la modificación de las copas o el cambio de plantación que permita adecuar el frutal a la calidad de exportación requerida. Esto no ocurre ni está previsto en esta iniciativa.

¿Qué estamos haciendo con los institutos de investigación que deberían apoyar técnicamente a los pequeños productores, que no tienen posibilidad de contratar investigadores? No se está incrementando la acción del INTI, del INTA y del propio Conicet; aquí no mencionaré —para no entrar en liviandades— qué se recomienda hacer a los investigadores de este último organismo.

Un gobierno que realmente quiere enfrentar esta crisis debería crear un sistema mixto de

consultoría para orientar a las pequeñas y medianas empresas en aspectos relativos a una mejor producción o cultivo. Desde el punto de vista de la Cancillería se debería estimular todo aquello que produzca la introducción y el mejoramiento de los canales de exportación. Si se me presentase un plan de esta naturaleza, realmente diría que estamos preocupados por la productividad de las pequeñas y medianas empresas y, en consecuencia, por el desempleo.

Me temo que únicamente estamos preocupados por que exista una mayor concentración de capital, que ha sido promovido de aprensivamente. Además no se admite que habrá un sector castigado, del cual este gobierno no quiere hacerse cargo; así se dice que "pobres hubo siempre".

Por todas las razones expuestas vamos a votar por la negativa este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: solicito tenga a bien informarme si soy la última oradora anotada para hacer uso de la palabra durante la consideración en general.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Hay otros seis oradores anotados, señora diputada.

Sra. Zuccardi. — A esta altura de las opiniones es difícil exponer criterios que no sean reiterativos, pero no puedo dejar de expresar mi posición en razón de que estamos ante un capítulo pendiente de la política económica argentina: favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. En las actuales condiciones no pueden desenvolverse la pequeña y mediana agricultura, ni el pequeño y mediano comercio, ni la pequeña y mediana industria.

Hoy, por medio de una ley, de un estatuto, se pretende decir a la población en general que encontramos la solución, la panacea.

En realidad lo único que tiene de bueno el instrumento legislativo que estamos considerando es la introducción del tema en sí mismo en el debate colectivo. Hay algunos títulos como el de la flexibilización laboral, que están desdibujando absolutamente los aspectos reglamentarios centrales que debería contener una legislación que pretenda amparar y promover efectivamente el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Es muy preocupante que en el título I, de disposiciones generales, aparezca absolutamente difuso el concepto de pequeña y mediana empresa. Si bien no puede ser estático y es difícil definirlo por ley —hecho que aceptamos—, es también impensable que no puedan esbozarse

criterios que en algunos otros países se utilizan, del mismo modo que es muy difícil imaginar unidades productivas grandes cuando en general, en el mundo entero, no pasan de veinte operarios.

Es cierto que es diferente la situación en las distintas regiones de nuestro país: el desarrollo de la pequeña y mediana empresa cerca del cordón urbano del Gran Buenos Aires o del gran Rosario no es el mismo que el de las radicadas en otros lugares del interior. Por ello podría haber sido más imaginativo el proyecto incluyendo una cantidad de variables que al conjugarse permitieran esbozar una definición más acertada. Podría haberse relacionado el personal con el monto de ventas, con el capital de la empresa, con el personal universitario que desarrolla tareas, con la tecnología empleada, con el nivel de endeudamiento o con la cantidad de plantas o unidades productivas.

Esta Cámara debería durante el tratamiento en particular intentar llegar a una fórmula polinómica que permitiera lograr una definición adecuada, preservando el espíritu de apoyo a la pequeña y mediana empresa y restringiendo los amplios márgenes de discrecionalidad que en este proyecto de ley se dejan al Ministerio de Economía.

Estos márgenes de discrecionalidad son los que convienen a la política económica nacional, hoy centralista y concentradora, pero no se utilizan en favor de los sectores a los que realmente corresponde beneficiar.

En relación con el título II, sobre sociedades de garantía recíproca, el tema abordado debería ser objeto de otro instrumento legislativo, sin complicar la norma que hoy se pretende sancionar para favorecer a la pequeña y mediana empresa. Si es difícil poner a dos o tres pequeñas o medianas empresas de acuerdo, imaginemos lo que puede suceder si se pretende que coincidan doscientas unidades productivas para llevar adelante un proyecto.

En cuanto al título III aparece muy evidente el tema de la flexibilización laboral —que ya hemos debatido en esta Cámara— que no sólo no solucionará el problema del desempleo en la Argentina sino que tampoco aportará el marco legal que hoy es necesario para que estas condiciones precarias conlleven una redefinición entre el trabajo y la producción, en una forma absolutamente ajena a la que este país quiere construir.

Según la opinión de varias organizaciones de pequeñas y medianas empresas y pequeños y medianos empresarios que hoy sufren la crisis

y tienen una idea del país que quieren construir, ellos también saben que no es posible el desarrollo de relaciones de calidad y de productos que puedan ser competitivos en el mundo si conllevan en su seno situaciones de explotación e inequidad tan absolutas como las que se están planteando en el capítulo referido a la flexibilización laboral.

Esas medidas no sólo van a legalizar las condiciones precarias de trabajo sino que además no contribuirán a la generación de un solo puesto de trabajo. Como sucedió en relación con medidas adoptadas con anterioridad, se está pidiendo un esfuerzo absolutamente desigual que está centrado sólo en el trabajador e implica aceptar condiciones de trabajo cada vez menos dignas, pero no se requiere un esfuerzo equivalente al sector empresario, aunque sea pequeño o mediano.

Tampoco es esto lo que filosóficamente sostiene el sector de los pequeños y medianos empresarios, quienes saben que una relación adecuada y armónica entre el capital y el trabajo es el cimiento efectivo de una producción de buena calidad que pueda ser competitiva en el mundo.

Cuando se piensa en la flexibilización laboral en una época de desempleo creciente tan importante como el que se registra en la Argentina en estos momentos, no puede dejar de tenerse en cuenta que la recapacitación laboral y la implementación de programas estratégicos constituyen medidas fundamentales para cambiar la situación en que nos encontramos. Sin embargo, el proyecto de ley es permisivo en todos esos puntos y sólo hace manifestaciones de buenos deseos en el sentido de que los obreros podrán capacitarse siempre y cuando gocen del consentimiento de su patrón; pero en ningún momento se está forzando, exigiendo o imponiendo el marco legal para que esa recapacitación pueda tener lugar y sea un derecho en el trabajo.

Del mismo modo se evade una cuestión que debería existir en cualquier legislación moderna del trabajo: la posibilidad de que los trabajadores tengan acceso a la información relacionada con el manejo de la pequeña unidad productiva, de la pequeña y mediana empresa, para hacerse socios no sólo en la desgracia sino también en los desafíos a enfrentar, y así contribuir con su esfuerzo a la generación de beneficios que tal vez en un modelo más justo puedan llegar a ser compartidos.

Quiero decir con ello que se están colocando todas las cargas sobre un solo platillo de la

balanza, sin exigir del otro lado una contrapartida. Por otra parte no puede dejar de pensarse que persiste el modelo absolutamente centralista y hegemónico impulsado por la política nacional, que también en este proyecto concentra todas las decisiones que tienen que ver con la reglamentación de la ley en manos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, sin que exista intervención federal.

Considero que debemos solucionar durante el tratamiento en particular las cuestiones a las que me he referido. Más allá de que nuestro bloque ha anticipado su voto negativo a esta iniciativa, oportunamente solicitaremos una serie de modificaciones a fin de que el efecto negativo de este proyecto de ley pueda ser atemperado.

Por último quiero referirme a quienes ciegamente van a votar el proyecto en consideración. Lamento que ni siquiera escuchen los argumentos de quienes nos hemos tomado el trabajo de analizar el texto y efectuar las respectivas consultas con distintos grupos de trabajadores y titulares de pequeñas y medianas empresas.

Al sancionar este proyecto estarán terminando de consolidar y cristalizar una herramienta más para favorecer la exclusión social, sin generar una sola medida que atempere el cisma que está produciendo el desempleo en la Argentina.

Preferiría que antes de votar ciegamente por obediencia partidaria, cada legislador fuera capaz de hacer una profunda reflexión acerca de las condiciones que se pretenden imponer en la relación entre el trabajo y el capital. Este debería ser el tema de debate, es decir, cuáles son las relaciones que pretende nuestro país para su propia comunidad: si quiere el modelo de Taiwán, de mano de obra barata, descalificada y de bajos niveles educativos, o un modelo como el que el país se merece para seguir estando a la vanguardia de otras naciones de Latinoamérica y poder construir una sociedad más justa. Este es el gran interrogante que debemos formularnos.

Lamento que algunos señores diputados se dejen engañar con un argumento que pretende hacer creer que con este proyecto se solucionará el problema de la pequeña y mediana empresa o el del desempleo, cuando en realidad nada va a cambiar. Con el instrumento que se va a sancionar, de ninguna manera se solucionará la situación de las PYMES, que es una deuda que aún tenemos pendiente.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rodríguez (José). — Señor presidente: en pocas palabras quiero fundamentar el sentido de mi voto.

En primer término he de dar lectura a un trabajo que el sindicalismo internacional presentó en la cumbre de Copenhague, que si bien no se relaciona con el tema que ahora estamos considerando, tiene mucho que ver con una cuestión a la que en reiteradas oportunidades hacen referencia los economistas y politicólogos de la Argentina.

Espero que no tengamos que discutir una iniciativa que esté más cerca de lo que refleja el trabajo aludido que de lo que hoy estamos considerando. El informe dice así: "... detrás de estas políticas económicas liberales de nuevo puño —contradictorias muchas veces— se esconde un capitalismo decadente, víctima de su irracionalidad y de su carencia de ética que siempre busca recargar en los trabajadores el origen de los problemas y el costo de los procesos errados.

"Este capitalismo decadente ha generado una explosión de inseguridad social, de mortandad, de especulaciones desequilibrantes, de cadenas de escándalos financieros y, sobre todo, de una contradicción insalvable entre las políticas macro y microeconómicas. Pretende el absurdo de conciliar el crecimiento económico con mayor desocupación abierta o pérdida de la calidad del empleo, en cuanto a tareas, estabilidad y remuneraciones."

Estas argumentaciones las escuchamos en nuestro país todos los días. Por ello que hacer referencia a este trabajo, porque no vaya a ser cosa que dentro de poco —o cuando ya no integre este cuerpo— la Honorable Cámara se encuentre discutiendo iniciativas que contengan esta filosofía que hoy está impregnando al mundo, por ejemplo en países del Sudeste Asiático donde chicos de seis años ya se integran a la actividad productiva, tal como ocurre en la India.

Muchas veces México fue tomado como ejemplo pero, lamentablemente, en el Día Internacional de la Mujer debo decir que en la maquiladora mexicana se esteriliza a las mujeres a fin de que no queden embarazadas y puedan continuar trabajando. Advierto que cuento con los nombres y apellidos de las personas involucradas, porque son denuncias realizadas a nivel internacional.

Lamentablemente este tipo de filosofía no está muy lejos de lo que todos los días escuchamos

por parte de economistas, politicólogos y algunos integrantes del gobierno.

He trabajado muchas veces codo a codo con las organizaciones de la pequeña y mediana industria desde 1970, es decir, hace 25 años, como integrante del movimiento obrero organizado. Hemos formulado propuestas e ideas y buscamos estatutos y formas especiales para encontrar algo que sin duda era la base de un crecimiento armónico en el país ya en 1970. Esto no se ha hecho nunca.

Sobre el particular podría contar algunas anécdotas. Quien les habla, con su sindicato, instaló una industria en una pequeña ciudad de Córdoba y estuvo discutiendo durante 30 días un convenio colectivo de trabajo, y la contraparte no era fácil porque era el doctor Funes de Rioja. En esa ciudad va a desaparecer la desocupación. En otra ciudad del interior hay una empresa que tuvo que cerrar víctima de productos que entraban al país con dumping; necesitaba 400 mil dólares para reabrir hasta hace 15 días; no sé si los habrá recibido.

No me asusta el término "flexibilidad" pero prefiero utilizar la palabra "racionalidad", que es algo totalmente distinto. Se pueden cambiar las normas de trabajo y mejorar la productividad cuando existe la voluntad en tal sentido de los sectores empresarios y sindical; no se puede hacer de otra forma. Las leyes no transforman la realidad: los que la transforman son los hombres que ejecutan y trabajan, que saben dónde les duele y dónde está el problema. Ellos son los responsables de cambiar todo lo que se debe modificar.

En España se sancionó una ley de flexibilidad laboral que yo llamaría horrible, que hace 15 días terminó en una reunión entre la OCDE —organización de empresarios— y las organizaciones obreras —UGT y las comisiones obreras— para determinar qué van a hacer con esa norma porque no sirve para nada, así o para enredar las relaciones y hacer menos posible la eliminación de la desocupación.

No estoy en contra de que las PYMES reciban un tratamiento especial. Ojalá no les pidan a esos pequeños empresarios que van al banco a pedir un crédito el certificado de vacunas del gato para otorgárselo.

Fundé mi voto en el argumento que se ha empleado hasta ahora, esencialmente por parte del señor ministro de Economía y que además ha servido para atar a esta Cámara cuando no hubo quórum. Este proyecto de ley no modifica la situación de desempleo del país. Esto lo afirmo con una convicción absoluta. Por

eso mi voto al proyecto de ley en consideración será negativo pues el tema central de la Argentina radica en determinar qué vamos a hacer para que haya menos desocupación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sra. Guzmán. — Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Corchueto Blasco. — Sí, señora diputada.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán. — Señor presidente: quiero informar a la Cámara que en el Salón de los Pasos Perdidos circulan comentarios en el sentido de que no habría existido quórum al comenzar la sesión. Solicito a la Presidencia que por Secretaría se confirme tal circunstancia y se deje a disposición de los señores diputados que lo requieran la lista de los legisladores presentes en aquel momento. Confío en que esos comentarios no son ciertos. Cuando en la sesión pasada se presentó una duda similar el presidente de la Cámara aclaró puntualmente la situación. Por ello, a efectos de que los hechos queden claros y no se afecte el prestigio del Parlamento, solicito el esclarecimiento de la versión que ha circulado.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Carlos Ernesto Soría.

Sr. Presidente (Soría). — La Presidencia informa que la nómina de los señores diputados presentes ya ha sido puesta a disposición del periodismo.

Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias. — Señor presidente: no podemos aceptar ningún tipo de comentario que cuestione la legitimidad de la sesión, respecto de la cual no existe ninguna duda. Ni siquiera hubo quórum estrecho porque la iniciamos con 135 señores diputados, de lo que todos fuimos testigos. Pero lo más curioso es que quienes pretenden cuestionar esta situación y crear un margen de duda son justamente aquellos que ni siquiera estuvieron en el recinto para controlar quiénes estaban presentes y quiénes no.

Estamos en tiempos prelectorales; por eso aparecen este tipo de actitudes tratando de crear un clima que en realidad no favorece a nadie. Aquellos que no cumplen con su deber elemental de estar presentes en la sesión mal

pueden cuestionar un quórum absolutamente legítimo.

Estas actitudes lamentables ponen en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones.

Sr. Presidente (Soría). — Prosiguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchueto Blasco. — Señor presidente: en este camino de retos y de pistas para entrar al siglo XXI —o, como dirían otros, para salir del siglo XX—, consideramos ahora un proyecto de ley tendiente a facilitar el trabajo y el crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Deseo recordar que muchos diputados aquí presentes fuimos representantes de las provincias argentinas en lo que en los años 1989, 1990 y 1991 se llamó el Congreso Nacional para las Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo presidente fue el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Duhalde, en ese momento vicepresidente de la Nación.

Luego de varios meses de labor, las comisiones de aquel Congreso sacaron conclusiones instrumentando muchos de los institutos que hoy se reclaman a través del artículo 13 de este proyecto de ley; ventanillas PYME, por ejemplo, y otros temas.

Estamos debatiendo si es el tiempo de este proyecto o no, si corresponde o no, y cuáles son los mejores mecanismos para asegurar más trabajo y mayor productividad. Se habla de que el 60 por ciento de la actividad que se desarrolla en el país se vincula directamente con la producción de las PYMES. Italia y Estados Unidos basaron su crecimiento en las micro, pequeñas y medianas empresas.

En 1989, junto con un grupo de señores diputados entre los que estaba el doctor Alberto Bribarne, actual secretario de Interior, presentamos un proyecto de ley que lamentablemente fue bastardeado, alivianado y mal conceptuado. Ese proyecto establecía un régimen particular en materia laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco de una emergencia ocupacional, porque vivíamos y avizorábamos la realidad que se presentaba.

Lo cierto es que esta realidad hoy nos muestra determinadas características de desempleo y la necesidad de estimular la producción y el crecimiento en base al desarrollo de estas estructuras.

¿Qué nos pasó que no pudimos en aquella oportunidad tratar el proyecto de ley, al que dejamos de lado desechando una posibilidad que nos hubiera dado cinco años de ventaja en la

práctica de modalidades de relación laboral con la micro, pequeña y mediana empresa?

Hay que darse cuenta de que a veces cuando este paquidermo lento que es el Congreso, tiene demoras, las padece el pueblo. Los diputados, todos y cada uno, y seguramente los senadores, estamos llenos de ideas y este listín demostrado que no responde a los tiempos de la Argentina —el Congreso Nacional— no hace lo que debería en profundidad, es decir, tocar los distintos temas.

Esta cuestión ya la mencioné refiriéndome puntualmente a lo social, hacia fines del año pasado, cuando señalé la cantidad de proyectos, plenos de creatividad y de sensibilidad que se adecúan a la realidad de nuestros tiempos, pero que resultan sueños que no se cumplen, porque los diputados los presentan y ni siquiera son tratados, ya que la modalidad de nuestro reglamento impide su consideración o permite que niñemos para un costado cuando la gente reclama que nos ocupemos de esos temas.

En este proyecto hay artículos clave como el 15, que determina que en base a un decreto que no está expresado —el 1304/94— se creen los polos productivos para los que el artículo 6º dispone la constitución de un fondo de garantía que servirá de estímulo a las empresas. Esos polos productivos vehiculizados por dicho decreto podrán así desarrollarse.

En mi provincia, concretamente en la localidad de Puerto Madryn, se está trabajando para el desarrollo de un polo pesquero.

Este tipo de normas va a facilitar que las empresas puedan funcionar, que puedan competir, dar trabajo y sostenerlo. Esta ley cuenta con institutos y normas valiosísimas en sus tres títulos.

También vale la pena resaltar la importancia de la sociedad de garantía recíproca. Los justicialistas en otras épocas, dentro de una determinada filosofía —la realidad nos obliga a ser pragmáticos y a cambiar—, hablábamos de la nacionalización de la banca y de la orientación del crédito como una modalidad de hacer crecer al país y solucionar los problemas de la gente. Hoy ya no hablamos de la nacionalización de la banca, pero siempre reclamamos la orientación del crédito aun hacia aquél que no tiene garantías para recibirlo. Y hoy, un artesano, una familia, una microempresa, un pequeño y mediano productor agropecuario, industrial, comercial o de servicios, en base a la creación de las sociedades de garantía recíproca, contará también con una institución que evaluará el factor de riesgo de esas estructuras para poder tener un fondo de garantía, para obtener y también reclamar posibles créditos para su desarrollo y crecimiento.

En nuestra Argentina el desarrollo sostenido de la economía tiene muchos elementos a los cuales recurrir. Tal como reconocen varios compañeros de extracción sindical, que avizoran la inutilidad o la dificultad del título III, que habla de las relaciones laborales, por lo menos estamos vivos y buscamos una alternativa al propio proyecto del Poder Ejecutivo.

Por lo menos, las instituciones sectoriales dijeron sí a esta alternativa posible de relación laboral. Quiere decir que no estamos quietos y le estamos diciendo al mundo que somos capaces de cambiar códigos viejos y, como señalaba recién el señor diputado José Rodríguez, adecuándonos a una modalidad que ya existe en el país, con el sello de la potencia y la firmeza que implica una ley.

Cuando hablamos de trabajo, nos referimos a él como factor de integración social, como búsqueda de igualdad de oportunidades. Cuento con datos de Europa, del Grupo de los Doce, según los cuales España tenía en 1989 sin trabajo un 38 por ciento de los muchachos de menos de 25 años. Argentina tiene un 40 por ciento de muchachos y mujeres menores de 25 años sin trabajo ¡O más! ¡Qué tal!

Y cuando hablamos de la igualdad de oportunidades, si España tiene un alto porcentaje de mujeres menores de 25 años sin empleo, eso también habla también claramente de la desigualdad de oportunidades. Es una brecha que también se advierte, además en los jóvenes, en los discapacitados, los discriminados, los aborígenes, los homosexuales y los que tienen SIDA, los cuales no pueden trabajar. En ese marco planteamos que también hay que responder a las exigencias de la economía y que estamos dispuestos en la Argentina, cuando pase este chubasco —que es un temporal con granizo que golpea y lesiona—, a trabajar por el crecimiento, la productividad, la competitividad y, finalmente, por el empleo.

Existe un capital inmaterial que todos conocemos: la educación. La nuestra no será la mejor educación del mundo, pero no es mala. Quizá sea la mejor de América latina. Aun así no estoy satisfecho. Pero para trabajar sobre las PYMES, ¿qué tendríamos que definir con respecto al sistema financiero y a nuestros bancos que están hoy en la picota? Hoy, 8 de marzo de 1995, para que haya empleo y productividad con posibilidades de responder a un sistema sustentable económicamente, tiene que existir ese capital inmaterial de la educación.

¿Por qué me referí en otro tramo de esta sesión a las expresiones de la señora diputada Fernández Meijide? Porque no es lo mismo leer un

"manual para recuperar empleo" en la Biblioteca del Congreso que, por ejemplo, en la localidad de Río Pico, a 2.500 kilómetros de la Capital Federal; tampoco es lo mismo leerlo en los valles de Jujuy, Salta o Tucumán.

Me estoy refiriendo a la Patagonia y al Noroeste, que todavía esperan —lo digo no obstante ser un hombre del equipo de gobierno— un sistema planificado de desarrollo y sostén de nuestra economía para que nosotros, que hacemos lo que debemos hacer, tengamos un sustento para sobrevivir en esos lugares.

Finalmente están los aspectos vinculados con la concertación social. Hay temas en los cuales la Argentina está en deuda, y no es porque alguno de nosotros no se haya preocupado sino porque algunas cosas que se han planteado durante tantos años siguen patinando sobre no sé qué superficie deslizante.

Adelanto que voy a votar favorablemente este proyecto de ley, acotando que en la región de la que soy oriundo no hay tequila, chicha ni *caipirinha* sino petróleo, agua de mar y nieve. En nuestra región tenemos obreros que se dedican a la extracción del petróleo, que trabajan en el sector privado y en el no privado; tenemos pescadores, portuarios y gente que trabaja en la cordillera, que necesitan una tutela de sus relaciones laborales para evitar que ocurra —lo voy a decir con todas las letras— lo que aconteció hace dos años cuando junto con el presidente Menem recorrimos zonas de Jujuy y Salta y denunciábamos que los obreros eran tratados como esclavos y hasta se les pagaba en efectivo, discriminando en el pago del trabajo lo que hace el hombre de lo que hace la mujer.

Aunque no contamos con la producción de tabaco como en el Norte, también tenemos chicos de 9 a 12 años que realizan otras actividades. Por ello reclamo que existan leyes de seguridad, de higiene y de tutela del trabajador. Además pretendo que los ministerios de Trabajo de las provincias, como el de la Nación con sus respectivas delegaciones, hagan lo que se debe hacer: tutelar la relación empleador-empleado. De esta forma es como funcionarán las cosas.

Y, por último, falta sancionar otras normas, y así como tenemos la valentía y la firmeza de aprobarlas, también debemos tener la valentía y la firmeza de decir que las provincias son responsables de tutelar esta relación entre el trabajador y el empleador para que el primero no quede en un estado de indefensión (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: voy a hacer una referencia personal por una cuestión que se planteó en esta Honorable Cámara. Esta mañana hubo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sin quórum, en la que apareció un proyecto impreso que por lo menos los legisladores no oficialistas no teníamos en nuestro poder. Temeroso de que sucediera lo mismo que con el proyecto de ley sobre las PYMES —cuando fui a buscar el despacho encontré que ya estaba impreso y en circulación—, en el momento de firmar el dictamen solicité la información al encargado de la comisión...

Sr. Camaño. — ¿Me permite una interrupción, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Molinas. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Soria). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño. — Señor presidente: deseo hacer una aclaración para que no conste en la versión taquigráfica algo que no es verdad. Esta mañana la Comisión de Presupuesto y Hacienda funcionó con quórum. Por eso, ante la duda que plantea el señor diputado Molinas, si es necesario solicito que se traiga la lista de los miembros de la comisión que firmaron el dictamen.

Lo que afirma el señor diputado por Santa Fe es incorrecto, pues luego de media hora de espera la comisión comenzó a funcionar con quórum, y siguieron sumándose diputados. Finalmente el dictamen fue suscrito por 18 legisladores.

Sr. Presidente (Soria). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: cuando comenzó la reunión no había quórum, y la prueba es que las firmas que antecedían a la mía no alcanzan al número reglamentario.

Desde 1983 vengo sosteniendo que las dietas de los legisladores deben estar sujetas a la retención del impuesto a las ganancias, de manera que solicité firmar el despacho con esa disidencia y se me informó que la única modificación que se había introducido se refería justamente a este tema, motivo por el cual estampé mi firma después de los cinco o seis diputados que habían asistido hasta ese momento. Más tarde, como es de práctico, se juntaron las firmas para que el dictamen fuera aprobado.

Con respecto al proyecto de ley en consideración, creo que pocas veces se ha dado un caso en el que se cumpla tan claramente aquello de que el pabellón encubre las mercancías de contrabando, porque bajo la bandera de la defensa de las PYMES en realidad se está bus-

cando establecer un sistema que termine con las conquistas sociales y las leyes laborales.

En primer lugar, entendemos que no es posible que se deje en manos del ministro de Economía la determinación de cuándo una sociedad es PYME, cuándo no y cuándo va a gozar de determinados beneficios.

El primero de los tres títulos de esta iniciativa es un conjunto de buenas intenciones: "... fortalecerá y coordinará el accionar de los organismos y programas ya existentes..."; "...modificar, racionalizar y fortalecer..."; "...priorizar la profundización, ampliación y difusión..."; etcétera. Se trata de meras expresiones teóricas que no se cumplirán porque no aparece ninguna norma imperativa que las establezca. De este modo volveremos a repetir aquello de que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones.

El Estado tiene en sus manos los medios para que esto se haga efectivo; pero lo que también debe tener es voluntad para hacerlo.

El título II está imbuido de la mentalidad economicista del actual Poder Ejecutivo: que se encarguen los capitales. De este modo se crea un producto financiero que será el encargado de proteger a las pequeñas y medianas empresas. Esto revela que el propósito de fomentar esos grupos de capitales so pretexto de otorgar beneficios a las PYMES es algo parecido a lo ocurrido con los fondos privados para los grupos capitalistas en oportunidad de debatirse la ley sobre vivienda.

Con respecto a estas sociedades en las que los protectores tendrán el 49 por ciento y las PYMES el 51 por ciento, quien conoce la historia de nuestro país sabe qué fácil resultará a estos protectores —capitalistas— conseguir una PYME en malas condiciones para revertir este porcentaje. Quizá aquí se pueda aplicar aquello de que de los amigos me libre Dios, que de los enemigos me libre solo.

Nos oponemos a todo el sistema que se establece a partir del artículo 83 en adelante porque entendemos que éste es un problema fundamental. El Poder Ejecutivo considera que todo el problema de los altos costos empresarios se debe a los costos laborales, y sobre esa base hay que tratar de limitar.

Si tomamos el balance de cualquier empresa —grande, mediana o pequeña— veremos que el costo laboral es ínfimo frente al costo financiero con esta usuraria percepción de intereses en el *call* que en el día de ayer o antes de ayer llegó al 75 por ciento.

Por consiguiente, la situación de las PYMES no es el producto del costo laboral sino de la apertura indiscriminada, de la retracción del cobro, de la falta de créditos. Y en lugar de combatir esto vamos a crear un organismo financiero integrado en un 49 por ciento por grupos financieros o bancarios, que son los encargados de salvar a las PYMES. ¡Dios nos libre de estos salvadores!

Además esta normativa establece el pago en cuotas del aguinaldo, desnaturalizando totalmente su sentido. También se modifica el sistema del preaviso. Todo esto es muy grave porque en momentos en que hablamos de la disgregación familiar y de los problemas que provoca esta situación en la República Argentina —nadie lo niega— se otorga al patrón la posibilidad de fijar cuando quiera las vacaciones del trabajador, las que pueden no coincidir con las de su cónyuge o las de sus hijos. Esto intensifica aún más el problema de la disgregación familiar, que tanto preocupa al país.

Creemos que bajo el pretexto de una buena bandera y de la noble idea de defender a este grupo de empresas que son importantísimas para el país, se llega a la liquidación del sistema previsional y de las relaciones laborales; y esto nos preocupa. Entendemos que esta norma contiene meras declamaciones teóricas y no modificará en absoluto la situación actual. Por ejemplo, en su primera parte crea un organismo que puede ser perverso en manos de capitalistas que actuarán como promotores o protectores de las PYMES. Por la vía del atajo, con la bandera de la defensa de las PYMES, se suprime el sistema laboral que tanto ha enorgullecido a la República Argentina.

Por estas razones, sin perjuicio de que plantearé algunas observaciones durante el tratamiento en particular, vamos a votar negativamente en general.

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz.— Señor presidente: después de haber escuchado argumentos muy valiosos en favor y en contra del proyecto de ley en consideración, es poco lo que podemos agregar.

En términos generales coincido con el contenido del título I, donde se promocionan y otorgan importantes beneficios a las PYMES. Ojalá se cumpla con el espíritu de la ley.

También estoy de acuerdo con lo establecido en el título II en el sentido de que se genera un círculo de solidaridad entre las PYMES para que ellas autogestionen su propia financiación; una financiación genuina que va a depen-

der de la solidaridad, asociación y espíritu de trabajar en grupo.

Sin embargo, respecto de este título creo que si desde el Congreso de la Nación exigimos solidaridad para con las PYMES, si desde todo el país estamos generando un espíritu de salvataje hacia ellas en base a la autoayuda y a la colaboración desde todos los ámbitos, dicha solidaridad también debemos exigirla en otros lados. Esta solidaridad también hace falta en los gobiernos provinciales, que dejan de lado la aplicación de algunos aspectos del Pacto Fiscal que benefician a las PYMES. En varias provincias todavía no se ha cumplido con el Pacto Fiscal, lo que perjudica a aquéllas. Muchas provincias deberían ser solidarias con las pequeñas y medianas empresas en cuanto a las tasas y tarifas por servicios que les cobran. Muchas PYMES son las que pagan las mayores tarifas de energía en las provincias.

En este círculo de solidaridad que tratamos de procurar para las PYMES es importante el rol del gobierno nacional. Los inspectores de la DGI no son para nada solidarios con éstas: los datos estadísticos muestran que las PYMES son las más castigadas por pequeños problemas. Debido a fallas en las cajas registradoras o a la falta de cumplimiento de alguna resolución poco importante, son castigadas con fuertes multas que aplica la DGI.

Es muy buena la solidaridad que solicitamos a las PYMES para que se autofinancien y autogestionen, pero también debemos exigir la solidaridad del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para el salvataje de estas empresas. Es menester comprender que los pequeños y medianos empresarios también tienen problemas para adaptarse a la nueva economía y a las nuevas resoluciones contables. En este aspecto también debemos ser solidarios.

Con respecto al título III es muy poco lo que quiero expresar. Resulta muy positivo que se solicite un sacrificio importante a la clase trabajadora para salvar a las PYMES. Esperamos que esto sea simplemente un sacrificio de los jóvenes y de los nuevos trabajadores para dicho salvataje, y no un nuevo esfuerzo para hacer más ricos y poderosos a los grandes grupos empresarios.

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela.— Señor presidente: es un tiempo extraño el que estamos viviendo en la sociedad argentina. Parece que el tiempo de las encuestas, de las imágenes, de las conveniencias y de la "transa" ha declarado *démodé* hablar

de la ética, de los principios doctrinarios y de las cuestiones de conciencia.

Sin embargo, cuando los hombres y los pueblos pierden conciencia de los valores trascendentes y permanentes de la naturaleza humana, comienza su decadencia y el tránsito por el camino equivocado. Esos valores, que son propios de la condición humana, no pueden ser desconocidos ni dejados de lado cuando se trata de regular las condiciones y las relaciones sociales entre los seres humanos.

Esta norma que hoy estamos tratando apunta precisamente a una de las cuestiones más trascendentes y fundamentales del ser humano, como es el trabajo. En el año 1891, hace ya más de cien años, el papa León XIII, en la encíclica *Rerum novarum*, referida a la cuestión social y a la problemática del trabajo, nos decía que la equidad exige que la autoridad pública tenga cuidado del obrero, "haciendo que le toque algo de lo que aporta a la común utilidad, con casa en qué morar, vestido con qué cubrirse y protección con qué defenderse de quien atente a su bien, pueda con menos dificultades soportar la vida. De donde se sigue que se ha de tener cuidado de fomentar todas aquellas cosas que en algo pueden" atentar contra las necesidades del sector obrero.

Más adelante León XIII señalaba que los que gobiernan deben proteger "la comunidad y los individuos que la forman. Deben proteger la comunidad, porque a los que gobiernan les ha confiado la naturaleza la conservación de la comunidad de tal manera, que esta protección o custodia del público bienestar es, no sólo la ley suprema, sino el fin único, la razón total de la soberanía que ejercen; y deben proteger a los individuos o partes de la sociedad, porque la filosofía, igualmente que la fe cristiana, convienen en que la administración de la cosa pública es por naturaleza ordenada" y debe tender al necesario equilibrio de las relaciones sociales.

Luego señalaba: "...en la protección de los derechos de los particulares, débese tener en cuenta principalmente la clase ínfima y pobre", refiriéndose a los trabajadores. Y seguía: "Porque la clase de los ricos, como se puede amurallar con sus recursos propios, necesita menos del amparo de la pública autoridad; el pobre pueblo, como carece de medios propios con qué defenderse, tiene que apoyarse grandemente en el patrocinio del Estado. Por esto, a los jornaleros... —se refiere a los trabajadores— ...que forman parte de la multitud indigente, debe con singular cuidado y providencia cobijar el Estado."

Con relación al aspecto humano decía: "...lo primero que hay que hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de hombres codiciosos... —característica que tenemos en nuestra propia naturaleza, y esto lo decía un Papa— ...que, a fin de aumentar sus propias ganancias, abusan sin moderación alguna de las personas, como si no fueran personas sino cosas. Exigir tan grande tarea, que con el excesivo trabajo se embote el alma y sucumba al mismo tiempo el cuerpo a la fatiga" es un atentado contra la naturaleza humana. "Débese, pues, procurar que el trabajo de cada día no se extienda a más horas de las que permiten las fuerzas."

Estos conceptos fueron desarrollados en el título III de la encíclica *Rerum novarum*, referido a la acción del Estado en su relación con los derechos del trabajador. Repito que fue expresado en 1891, en pleno auge de la era industrial.

Posteriormente esta temática fue desarrollada excelentemente por nuestro actual Papa, Juan Pablo II, en su encíclica *Laborem exercens*, en la que señala que hay que tener especial cuidado en que el trabajo siempre esté en función del hombre y nunca el hombre en función del trabajo, porque este concepto, desarrollado por la escuela economicista y materialista del siglo XIX, es un atentado contra la naturaleza humana ya que considera el trabajo como una mercancía que el trabajador vende al patrón o al empresario.

Es necesario colocar al trabajo en su justa dimensión, atendiendo a su sentido humano y no materialista. En este proyecto que hoy estamos tratando se han omitido conceptos trascendentes relacionados con la justa dimensión del trabajo, principios fundamentales y elementales que atañen a la relación laboral. Durante mis primeros años de universidad y todavía antes, cuando cursábamos el colegio secundario, nos daban que la desigualdad natural existente entre el capital y el trabajo obligaba a la necesaria tutela del Estado hacia el sector de los trabajadores, como forma natural y eficaz de procurar un equilibrio que no debe romperse pues de lo contrario los sectores más desprotegidos buscan la solución en la lucha de clases, que ha demostrado absolutamente su fracaso.

Por ello el general Perón decía que nuestro movimiento es nacional, popular y cristiano, y que su columna vertebral está constituida por las organizaciones obreras y los trabajadores.

Considero que introducir en una normativa especial para la pequeña y mediana empresa un título sobre la relación del trabajo como instrumento coyuntural para posibilitar el desarrollo, implica una oblicuidad inconducente a los fines que la norma persigue. Seguramente ninguno de

los que estamos aquí sostiene una posición contraria a la posibilidad de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que constituye la única herramienta eficaz —a nuestro juicio, fundamental— para el crecimiento sostenido y permanente de nuestras regiones. Así lo entendemos los hombres que provenimos del interior del país.

Por otro lado considerar que la ruptura del equilibrio en la relación laboral constituye un elemento coadyuvante es un grave error que posteriormente tendrá que ser revisado. Asimismo no tenemos dudas acerca de la necesidad de que el exceso contenido en las actuales normas laborales sea concienzudamente revisado, siempre que ello no signifique —como a mi juicio ocurre en este caso— la ruptura del equilibrio entre las relaciones empresariales y del sector del trabajo.

No creo en las concepciones simplemente economicistas, que pierden de vista la naturaleza humana de la relación laboral y al hombre considerado en su justa dimensión, como bien lo señalara la señora diputada Troyano. El movimiento nacional justicialista tiene como fin primero y último al hombre; es allí adonde debe apuntar toda normativa que atienda a una cuestión tan trascendente.

Este proyecto no condice con los postulados del movimiento nacional justicialista, que muchos de quienes estamos aquí hemos llamado desde nuestra cuna. No podemos renunciar a tales convicciones a raíz de una cuestión coyuntural, pues sabemos absolutamente y a ciencia cierta que, más allá de las graves dificultades por las que atraviesa nuestro país, y de que somos conscientes de que deben adoptarse medidas de excepción en beneficio de toda la Nación, éste no es el camino. Sabemos que el rumbo es mucho más complejo y que más allá de la buena intención de quienes elaboraron este proyecto lo cierto es que estamos retrocediendo en más de doscientos años en lo atinente a la evolución del derecho del trabajo.

Por una cuestión de conciencia —aunque muchos pueden decir que es un argumento pasado de moda— no puedo renegar de lo que durante largo tiempo he enseñado a mis alumnos y que constituye los principios básicos y fundamentales del derecho del trabajo.

Por otra parte, para ser consecuente con nuestra doctrina y el pensamiento que nos legara el general Perón así como con los propios principios sociológicos, filosóficos y jurídicos que debe contener una norma referida a las relaciones de trabajo, considero que el presente proyecto no debe recibir el voto afirmativo de la Honorable Cámara. Por lo menos mi voto no será en ese sentido.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: por su intermedio quiero dirigirme al señor diputado Borda y en una sola intervención hacer referencia a tres cuestiones que se van a presentar en la discusión en particular pero que, por su contenido, conforman un aspecto general del proyecto en discusión.

Específicamente me estoy refiriendo a los artículos 30, 81 y 103, vinculados con la autoridad de aplicación que se designa. En los dos primeros se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y en el tercero se fija esta condición para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Es necesario tener presente que no corresponde al Congreso Nacional sancionar una norma en la que indique al Poder Ejecutivo cuál es la autoridad de aplicación, ya que es una facultad reservada a este último determinar dentro de su área quién ejercerá la autoridad en la aplicación de una ley.

Este es un asunto muy antiguo. Sabemos que fue desvirtuado en épocas en las que no funcionaba el Congreso porque obviamente en esos tiempos el propio poder que dictaba la ley indicaba en quién residía la autoridad de aplicación, pero en el año 1983 y con motivo de la ley sobre alconafita el Poder Ejecutivo realizó una luminosa observación en la que indicó —con fundamentos doctrinarios correctos— que el Poder Legislativo no puede fijar cuál es la autoridad de aplicación. Mucho menos puede aceptarse la forma establecida por el artículo 81 del presente proyecto para delegar la facultad de normas reglamentarias que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo en un ministerio específico y determinado.

Por lo expuesto considero que los tres artículos mencionados deberían ser suprimidos. En caso de que no se quiera modificar la numeración de los artículos que contiene el proyecto, en cada uno de ellos debería consignarse que la autoridad de aplicación será la que establezca el Poder Ejecutivo de la Nación porque de lo contrario se estaría incurriendo en un factor dissociante y distorsivo de nuestro sistema de legislación que luego ocasionará problemas en la aplicación de las normas.

Adelanto que en la consideración en particular formularé la correspondiente indicación sin ahondar en mayores fundamentos, aunque ya advierto que afortunadamente asiente con su cabeza el señor diputado Borda.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sebastiani. — Señor presidente: me da la sensación de que estamos discutiendo y escuchando opiniones de todos los legisladores respecto de la mal llamada flexibilización laboral en un contexto absolutamente distinto del que había cuando el proyecto entró a la Cámara de Diputados.

En el mes de mayo del año pasado presenté un proyecto de ley al que llamé de emergencia ocupacional cuando la desocupación rondaba alrededor del 10 por ciento. Allí planteaba cosas que realmente motivaban para que una lacra social como es este índice de desempleo pudiera empezar a revertirse en alguna medida.

Volviendo al tema del contexto quiero expresar que estoy muy preocupado esperando la visita del señor ministro y de sus colaboradores porque en este momento tenemos la información y la sensación de que la realidad está pasando por otro lado. En este sentido quiero decir —como lo hicimos desde la Unión Industrial Argentina, entidad de cuya conducción formo parte— que esto es un parche, y los parches sólo sirven para caminar algunos kilómetros. Entonces hay que poner lo primero en primer lugar, y lo primero es escuchar al ministro y procurar que se tomen todas las medidas necesarias para revertir esta dramática situación que estamos viviendo. Más adelante podremos hablar de estas leyes laborales que tanto necesitamos para modificar el actual panorama.

Por lo expuesto, refiriéndome al título III, que regla las relaciones entre los pequeños empresarios y sus trabajadores, adelanto mi voto negativo.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: cuando comenzamos a considerar este proyecto escuchamos dos opiniones extremas que son coincidentes. Por un lado tenemos a aquellos empresarios que eran los más duros y querían aprovechar la oportunidad para lograr la total desregulación laboral. Eran o son los que querían la eliminación de los convenios colectivos de trabajo y —yo diría— los que también estaban apostando a que desaparecieran los sindicatos en la República Argentina. Ellos son los que dicen que este proyecto de ley no sirve. Y por el otro lado se ubican aquellos dirigentes gremiales que no están de acuerdo con nuestra postura porque no quieren que en el país se produzcan cambios en la legislación laboral que no apunten solamente a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Todos nos pondríamos contentos si esta ley también sirviera para la preservación de las actuales fuentes de trabajo, porque de lo contrario parecería que la preocupación en nuestro país fuera la de ocuparnos exclusivamente en cuidar a aquellos que hoy están trabajando sin importarnos la grave situación por la que atraviesan los que no trabajan. En una palabra, todos conocemos el diagnóstico; todos sabemos que hoy una enfermedad que se convirtió en epidemia: la epidemia es la desocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos a esperar que mueran todos los que están enfermos o empezamos a estudiar y a aplicar algún tipo de medicina que nos permita salvar la situación?

Considero que esta norma, que no es la panacea, que en todo caso no creará empleos en la medida que todos esperamos, servirá sin embargo para que en nuestro país se plantee una nueva forma de discusión en las relaciones laborales.

Es mentira que con esta ley se entregan conquistas sindicales. Es mentira que se rompe el régimen laboral. Aquel que lo dice es porque no leyó el proyecto y ni siquiera sabe lo que en él se previó.

El título III del proyecto que tratamos tiene dos artículos que son taxativos. Por un lado está el artículo 94 que dice que "en las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un mes cualquiera fuera la antigüedad del trabajador."

Esto, que es taxativo, se aplica para el trabajador que ingrese después de la sanción de la norma y no se aplica para el actual trabajador, que sigue amparado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro artículo taxativo e imperativo es aquel que permite que a través del convenio colectivo de trabajo se puede establecer el pago del aguinaldo en tres cuotas como máximo.

Los demás artículos que figuran en este título III están referidos a las tratativas por las que, a través de la discusión paritaria entre los sindicatos y los empresarios, se acuerda cuál será el régimen de trabajo y cuáles serán las normas que están dispuestas a implementar para las pequeñas empresas, es decir, para aquellas que tienen cuarenta o menos de cuarenta trabajadores, a fin de que a través de los convenios colectivos de trabajo se puedan establecer las condiciones que particularmente se crea que deben regir en esas empresas.

¿Que logramos con esto? Algo que en la Argentina hace muchos años que se viene discutiendo y nadie consideraba. En la Argentina se discu-

tía si era justo que fuera obligatoria la aplicación de un convenio firmado para cinco mil trabajadores, a un taller que tenía diez trabajadores. Hasta ahora siempre se sostuvo que esto era así, es decir que el gran establecimiento terminaba fijando convenios para la pequeña empresa. Pero lo cierto es que nunca se cumplió el convenio en ese taller de diez trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una relación laboral especial en la pequeña empresa. La relación especial está dada por el hecho de que el dueño trabaja al lado de los trabajadores y pacta condiciones distintas y al margen del convenio colectivo.

Entonces lo que estamos blanqueando es esa relación particular, para que podamos escribirla y certificarla ante el Ministerio de Trabajo. Alguien puede decir que tiene miedo de que los sindicatos no tengan fuerza para discutir convenios con las pequeñas empresas, a lo que yo respondo que en la actualidad ya se han discutido y aprobado más de trescientos convenios con modalidades de trabajo flexibilizadas, que han sido homologados por el Ministerio de Trabajo. En este sentido cito como ejemplo un convenio que está firmado por un diputado de la Nación que para mí es un dirigente de avanzada; me refiero al compañero José Rodríguez, quien firmó un convenio donde se establece como período de prueba un año para que el trabajador pueda quedar efectivo en una empresa. ¿Acaso se entregó? No, porque pudo trabajar para 180 nuevos trabajadores en un pueblo de Córdoba, que a raíz de ello tiene una próspera comunidad.

Esta es la obligación del dirigente gremial, este es el desafío que hoy tenemos. No redactamos una norma para entregar conquistas. Estamos haciendo una ley para que determinadas condiciones laborales se discutan a través de los convenios colectivos de trabajo. El proyecto de ley que estamos considerando en ningún lado dice que hay que quitar las conquistas a los trabajadores.

Tiene razón el señor diputado Polino cuando se cree de que quizás a través de un decreto del Poder Ejecutivo se puede estar afectando a algunas cooperativas. Si eso se produce el Congreso tendrá que corregirlo, sancionando una ley para que ese decreto se derogue si ataca la libre competencia de las cooperativas de trabajo para licitar en las empresas de servicios. Pero debemos resaltar que aquí estamos hablando de las verdaderas cooperativas, no las deshonestas que se están creando para no cumplir con la legislación laboral. De esas hay muchas.

Sr. Polino. — ¿Me permite una interrupción...?

Sr. Castillo (J. L.). — No, señor diputado, porque sé lo que usted piensa, y sé que está de acuerdo con esta propuesta porque ya me mencionó que presentó un proyecto donde se pena a las cooperativas que están cometiendo fraude.

Yo estoy tratando de expresar el pensamiento de varios diputados de extracción sindical, y si bien algunos se dan el lujo de acusarnos de traidores, no se animan a discutir públicamente con quienes ponemos el pecho, el corazón y la vida para salvar a la República Argentina. Ese es nuestro único objetivo. (*Aplausos.*)

Si nosotros no hacemos nada o no aprobamos esta norma que favorece a la pequeña empresa, ¿a quién beneficiamos? Eso lo vengo diciendo desde hace tiempo y parece que los señores diputados no llegan a interpretarme, ya que nadie presenta proyectos sobre esta cuestión. Reitero: de no aprobar esta norma, beneficiamos a las empresas de trabajo eventual —son más de quinientas—, que son las que contratan a trabajadores, cobran una comisión tanto de ellos como de las empresas que ocupan al trabajador y evitan con su intermediación que los trabajadores tengan relación de dependencia.

Ninguno de los que trabaja mediante estas agencias tiene relación de dependencia. La mayoría de estas empresas que contratan trabajadores eventuales no cumple con las leyes laborales. Y si bien existen en el país, resulta que nadie las controla para que cumplan cabalmente con su cometido.

Estoy de acuerdo con el señor diputado Polino en que tenemos que defender la mano de obra nacional. En ese sentido esta Cámara aprobó un proyecto de mi autoría de defensa de la mano de obra nacional. En primer lugar debe trabajar el argentino sin dejarse por ello de permitir el ingreso del extranjero. Pero no pongamos el carro delante del caballo: primero debemos defender la subsistencia de la familia argentina, luego dar oportunidad de trabajo a los demás.

En este proyecto de ley, en el título III, en ningún lado se dice que se suprimen las conquistas laborales. Se abre la posibilidad de que a través de la discusión de los convenios colectivos de trabajo puedan ponerse de acuerdo empresarios y trabajadores. Quizás, como dijo recién un señor diputado, a algún sector grande de la economía industrial no le convenga el sistema que se establece a través de este proyecto de ley.

En las actuales circunstancias tenemos que ayudar a los más débiles que son, para mí, en

este momento las pequeñas y medianas empresas, y los más grandes tienen que ayudarnos a salir del pozo. No es posible que las fábricas de automóviles, que se llenaron de plata vendiendo unidades, ahora, porque cayeron un 10 por ciento las ventas, decidan suspender trabajadores. Esto es lo que no hay que permitir y debemos denunciarlo permanentemente. (*Aplausos.*)

De una vez por todas en la República Argentina el sacrificio y el esfuerzo debe ser parejo. Lo que estamos haciendo aquí, como diputados y dirigentes obreros, es dar nuestro aporte, sin vendernos, sin traicionar a nuestros representantes. Pero también pedimos que los demás sectores hagan el sacrificio y el esfuerzo que está realizando la clase trabajadora para sacar al país de una crisis tal que si seguíamos así desapareceríamos como Nación. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: habíamos acordado que el señor ministro de Economía concurriría a este recinto a las 19 y 30. Nos hemos pasado bastante en el horario y en consecuencia, como miembro informante del dictamen de la Comisión de Finanzas, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del discurso que pensaba pronunciar para que esta Cámara pueda activar el trabajo aprobando la norma que estamos considerando.

Permítaseme simplemente no responder a las afirmaciones que se han hecho aquí porque de lo contrario nos tomaríamos demasiado tiempo.

Quiero no obstante precisar algunos conceptos en forma muy sintética con relación a uno de los títulos de este proyecto de ley, referido a las sociedades de garantía recíproca.

En primer lugar, el concepto de la institución jurídica de las sociedades de garantía recíproca fue aprobado por esta Cámara de Diputados de la Nación al sancionarse el proyecto contenido en el expediente 2.585-D.-92, cuyo autor fue el diputado Baum, y contó con el apoyo de los señores diputados Matzkin, Balestrini, Lamberto y otros. También el Senado aprobó ese concepto al sancionar el proyecto contenido en el expediente 153-S.-94. En consecuencia, este proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo no es ajeno a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores.

¿Qué ocurre con este tema en la Argentina y en el mundo? El problema fundamental de la pequeña y mediana empresa es el vinculado con el acceso al financiamiento. Esta carencia central para el desarrollo de las pequeñas y

medianas empresas tiene infinidad de consecuencias. No las vamos a comentar porque emergen por sí mismas, y la caracterización más importante del problema consiste en que no existe financiamiento por la ausencia de avales, que es la contracara del riesgo.

En síntesis, en Europa se ha establecido este tipo de instituciones —vamos a hablar luego respecto de la experiencia internacional existente— para resolver la situación que se presenta como consecuencia de este corsé que afecta a las PYMES.

Una de las preguntas elementales que debiéramos hacernos consiste en ver en qué cambia la situación de una pequeña empresa frente al mercado financiero con respecto a otra que se asocia en una de estas instituciones.

Como consecuencia de la escasez de oferta de créditos el mercado financiero está sectorizado. Esto es evidente y no hace falta ser economista para darse cuenta de que las grandes empresas tienen un segmento del mercado financiero con ciertas condiciones y las pequeñas empresas tienen segmentos marginales del sistema financiero e illos que existen tasas que son aberrantes e incompatibles con la posibilidad de crecimiento, desarrollo y —dirí— permanencia de la vida activa dentro de la empresa.

La experiencia internacional nos dice que las PYMES que se asocian a través de los mecanismos que hemos mencionado pasan de participar en el mercado secundario marginal de escasez de crédito y de altas tasas de interés a tener relación con los mercados principales del crédito, que son los lugares a los que tienen acceso las grandes empresas.

Entre las críticas formuladas se mencionó el tema de la concentración. Para que se produzca la concentración se requiere que unos y otros tengan distintas posibilidades. En este aspecto las grandes empresas tienen ventajas comparativas respecto de las PYMES y por ese motivo las pequeñas caen presas de los procesos de concentración. Reitero que esto sucede porque no tienen las mismas posibilidades. Por eso este tipo de sociedad que propiciamos crear otorga las mismas posibilidades.

Jurídicamente se trata de un tipo de sociedad con normas específicas que se aplican en tanto y en cuanto estén contempladas en el texto; de lo contrario se aplican en forma supletoria las normas de la ley 19.550, y en especial las referidas a las sociedades anónimas.

Creo que han quedado en claro cuáles son los objetivos de esta iniciativa, pero considero oportuno aclarar que este proyecto no resuelve por

sí el problema del financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto tampoco podríamos hacerlo nosotros, aunque si es nuestra responsabilidad brindar a la gente instrumentos para que puedan resolver los problemas.

Alguien se preguntó en este recinto en qué cambiaba la cosa e incluso se planteó como un error fijar un número de socios tan grande: 200. Este es el eje de la cuestión económica; por eso quiero explicar por qué es un error concebir que al establecer un mínimo de socios se pretende beneficiar a las sociedades que propiciamos construir. Si se trata de sumar las garantías individuales la suma sería algebraica. Es decir que la suma de cinco empresas sería igual en la garantía de la sociedad a la suma de las partes. De este modo no tendría sentido que se crearan estas sociedades.

Lo importante de estas empresas es que a partir del sistema de los grandes números y de la eliminación de los riesgos que implica construir sociedades con muchas empresas distribuidas regional y sectorialmente, se produce la desaparición macroeconómica de los riesgos —podríamos denominarlo de este modo—, y un peso puesto en garantía por parte de una pequeña empresa se transforma por medio de este mecanismo en veinte pesos de garantía que puede utilizar en su desarrollo y para su propio financiamiento.

Hemos introducido algunas modificaciones que a mi juicio no han sido comprendidas y que quiero explicar. La experiencia mundial en esta materia indica que, como ocurre con muchas cosas, los instrumentos de esta naturaleza se pueden utilizar para el bien pero también para el mal.

Hemos investigado cómo se han desarrollado estas empresas en España, Italia e Inglaterra, y hemos advertido que con una legislación adecuada sirvieron para cumplir el objetivo de fortalecer a las pequeñas empresas frente a la necesidad de participar en mejores condiciones en el mercado financiero y de negociar mejor las condiciones con los grandes oferentes de crédito. Pero como hemos trabajado con responsabilidad también hemos observado que hay experiencias internacionales que muestran que estas sociedades se han utilizado para licuar el riesgo comercial de las grandes corporaciones. Esto significa que se han utilizado para que las grandes corporaciones que tienen empresas dominantes impongan dentro de la operatoria de sus negocios la condición de ser miembro de una sociedad de garantía recíproca, de modo tal de socializar entre todas las integrantes PY-

MES dominadas los quebrantos que individualmente la corporación pueda tener en sus relaciones comerciales con cada una. Esto lo hemos evitado estableciendo un límite a la posibilidad del otorgamiento individual de garantías para cada pequeña y mediana empresa que no pueda superar el 5 por ciento. También hemos incorporado un límite respecto de las sociedades de garantía recíproca, por el que no podrán garantizar con más del 20 por ciento del total de garantías, a un solo acreedor.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Balestrini (M. A.).—Estas especificaciones eran imprescindibles para dejar en claro el carácter, el contenido y el sentido de este instrumento jurídico que estamos creando para que la sociedad en su conjunto, la economía argentina, el Estado —que tendrá mucho que ver en la constitución, en el apoyo y en la promoción de estas empresas— y las PYMES puedan contar con un instrumento más para resolver lo que a mi criterio constituye el problema central de éstas en la Argentina. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri).—No habiendo número en el recinto, se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Pierri).—La Presidencia informa a los señores diputados que, luego de finalizada la votación en particular, se hará presente en el recinto el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

—Se continúa llamando para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pierri).—Habiendo número, se va a votar en general el dictamen de mayoría.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri).—En consideración en particular el título I, que comprende los artículos 1º a 31.

La Presidencia informa que fueron aceptadas las modificaciones propuestas por el señor diputado Minniagurria a los artículos 2º, 4º, 6º y 12. Lo mismo ha sucedido con las modificaciones propuestas por el señor diputado Abihaggle en los artículos 2º y 30.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.).—Señor presidente: hemos compatibilizado las propuestas de distintos

diputados que han efectuado aportes. Quisiera leer esas modificaciones antes de pasar a votar según la modalidad indicada por la Presidencia.

Sr. Presidente (Pierri).—Elo sería conveniente para que no quede ninguna duda sobre las modificaciones propuestas.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rodríguez (José).—Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto por la negativa, tanto en la votación en general que ya se practicó como en la votación en particular que se va a realizar.

Sr. Presidente (Pierri).—Su voto por la negativa está registrado, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli.—Del mismo modo, señor presidente, dejo constancia de mi voto por la negativa, tanto en general como en particular.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Bischof.—Solicito a la Presidencia que quede expresa constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente (Pierri).—Así se hará, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.).—Espero que sepa disculparme, señor presidente, pero me veo obligado a formular las propuestas de modificación sin respetar el orden numeral de los artículos porque diputados de distintos bloques nos han hecho llegar sus sugerencias y no hemos podido reubicarlas conforme a aquel criterio. De todas maneras creo que a los fines perseguidos es exactamente lo mismo.

La primera modificación que vimos a señalar se refiere al artículo 58.

Sr. Presidente (Pierri).—Señor diputado: preferiría que se refiriera en primer término a los artículos incluidos en el título I.

Sr. Balestrini (M. A.).—Sería sumamente enojoso, señor presidente, ya que las propuestas de modificación no han podido ser numeralmente ordenadas. Solicito que, a modo de consideración especial, se me permita enunciar todas las modificaciones para luego proceder a votarse por títulos. Hemos tenido la mayor amplitud posible para recibir todas las modificaciones y ello ha jugado en contra de nuestro deseo de respetar el orden de los artículos.

Sr. Presidente (Pierri).—De acuerdo, señor diputado.

Sr. Balestrini (M. A.).—En el artículo 58 proponemos agregar un último párrafo que diga:

"Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento (15%) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad." Así concluiría el artículo 58.

En el artículo 37, al final del segundo párrafo, a continuación de "la autoridad de aplicación" debe incorporarse: "y suscriban acciones".

En el artículo 45, luego de "de igual valor", propiciamos agregar: "y número de votos". El segundo párrafo del mismo artículo queda redactado de la siguiente manera: "El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria. El capital social podrá variar, sin requerir modificación del estatuto...", continuando hasta el final tal como figura en el dictamen. Asimismo propiciamos la eliminación de la expresión "en conjunto" del tercer párrafo de este artículo 45.

En el artículo 66 se sustituye "valor real de las mismas" por "valor patrimonial neto".

Por otra parte, proponemos reemplazar el texto del artículo 32 que figura en el proyecto aprobado en general por el siguiente: "Caracterización. Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con el objeto de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se registrarán por las disposiciones del presente título y supletoriamente la Ley de Sociedades, en particular las normas relativas a las sociedades anónimas."

En el tercer párrafo del artículo 37, a continuación de donde dice "cinco (5) años", sugerimos la siguiente redacción: "Toda SGR habrá de contar con un mínimo de ciento veinte (120) socios partícipes. Autorízase a la autoridad de aplicación a modificar...", completándose el texto según el dictamen aprobado, es decir: "...estos mínimos en función de las peculiaridades regionales."

En el artículo 42 proponemos eliminar la palabra "anónima".

Se propicia sustituir la redacción del artículo 81 por la siguiente: "Autoridad de aplicación. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a través del Ente Nacional del Sistema de Garantías Recíprocas a crearse, será la autoridad de aplicación del presente título de esta ley. En tal carácter se dictarán las normas reglamentarias que fueran necesarias para el cumplimiento y ejercerá la fiscalización y supervisión de las sociedades de garantía recíproca, con excepción de lo dispuesto en el artículo 80."

Sr. Presidente (Pierri).— Señor diputado: el señor diputado Durañona y Vedia le solicita una interrupción.

Sr. Balestrini (M. A.).— La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia.— Señor presidente: durante la discusión en general formulé una propuesta con respecto a los artículos 30, 81 y 105 del proyecto, referida al sistema de la autoridad de aplicación. Hice llegar el texto de esos tres artículos —de acuerdo con mi propuesta de modificación— al señor diputado Borda, quien los aceptó en nombre de la comisión. Por lo tanto, creo que se ha deslizado un error en esta parte de la exposición del señor diputado Miguel Balestrini.

Sr. Borda.— Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri).— Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda.— Señor presidente: es cierto lo que dice el señor diputado Durañona y Vedia. Como él señalara con anterioridad, los artículos 30, 81 y 105 del proyecto establecen taxativamente cuál será la autoridad de aplicación. A raíz de ello el señor diputado Durañona y Vedia ha formulado una propuesta que nosotros hemos aceptado.

En consecuencia, la nueva redacción del artículo 30 sería la siguiente: "El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al presente título." El artículo 81 propuesto, cuya redacción no tiene diferencias fundamentales con la que acaba de leer el señor diputado Balestrini, dice así: "La autoridad de aplicación correspondiente al presente título será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que también dictará las normas reglamentarias que fueren necesarias para supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), con excepción de lo dispuesto en el artículo 80." Finalmente, el artículo 105 quedaría redactado así: "El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al título III de la presente ley."

De esa manera quedarían redactados los tres artículos en cuestión, en reemplazo del texto original, sobre la base de las fundamentaciones que oportunamente expusiera el señor diputado Durañona y Vedia.

Sr. Presidente (Pierri).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: quiero aclarar que el señor diputado Ibarbia oportunamente nos hizo llegar un conjunto de observaciones, algunas de las cuales hemos aceptado. Se trata de modificaciones propuestas por dicho señor diputado en representación de su bloque, y una de ellas la he leído anteriormente. Desde ya desconocía que el bloque de la Ucedé hubiera propuesto otras modificaciones al señor diputado Borda. De todas maneras, aunque no sea el trámite más lógico y racional, trataremos de compatibilizar ambas proposiciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: el señor diputado Ibarbia le solicita una interrupción.

Sr. Balestrini (M. A.). — La concedo señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: no se trata de observaciones canalizadas a través de dos bloques diferentes. Las modificaciones que he propuesto se refieren al título del proyecto de ley en relación con el cual, como cabecera, tiene competencia la Comisión de Finanzas. Las observaciones formuladas en la discusión en general por parte del señor diputado Durañona y Vedia se las alcanzamos al señor diputado Borda, por ser el titular de la comisión que tiene competencia para el tratamiento global del proyecto. No se trata de cuestiones diferentes sino que unas observaciones estaban referidas al título II, donde la Comisión de Finanzas era competente por la materia específica, mientras que las indicaciones realizadas por el señor diputado Durañona y Vedia eran de carácter general. Lamento que por falta de comunicación haya surgido esta confusión entre lo que anunció el señor diputado Balestrini y lo referido por el señor diputado Borda.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: a efectos de trabajar con seriedad sugiero que las correspondientes modificaciones se consideren al tratarse los respectivos títulos.

Sr. Durañona y Vedia. — No está claro, señor presidente.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en la consideración en general adelantamos que este proyecto había sido objeto de análisis no sólo en esta Cámara sino que también en el Senado. Como consecuencia de ello resultaba imprescindible compatibilizar el proyecto con

los señores senadores para evitar posteriores complicaciones.

Tengo en mi poder el texto de los artículos que fueron compatibilizados con el Honorable Senado. Por ello advierto que las modificaciones referidas a los artículos 32, 37 y 81 han sido iniciativa de los señores senadores, quienes participaron en el análisis de esta norma a efectos de evitar complicaciones cuando ésta pase a consideración de la Cámara revisora.

En razón de que las modificaciones que se introducen a partir de la intervención del señor diputado Borda alteran lo oportunamente acordado, solicito que encaremos la votación y que al momento de resolverse sobre estos títulos los analicemos detenidamente.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: sólo a efectos de acelerar la consideración del proyecto se decidió que el señor diputado Balestrini diera lectura de todas las modificaciones a incorporarse.

De todos modos corresponde aclarar que la propuesta que formulé, referida al artículo 81, guarda relación con el sistema general que planteé para el régimen de autoridad de aplicación. Por lo tanto sólo corresponde expresar en cada título que el Poder Ejecutivo designa a la autoridad de aplicación. En consecuencia, no existe ninguna incongruencia con lo que el señor diputado nos informa —como resultado de un extraño procedimiento parlamentario— que ha sido acordado con los señores senadores.

El señor diputado Ibarbia ha expresado que su propuesta era de carácter particular y que coincide con la indicación que formulé, relativa a los tres artículos, sobre la autoridad de aplicación, que es lo que ha leído el señor diputado Borda y que de ninguna manera se contradice con lo señalado en el resto.

A efectos de no complicar la discusión en particular solicito al señor diputado Balestrini que acepte la propuesta del señor diputado Borda, que ampliaré en la discusión en particular.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: me acota el señor diputado Borda que se trataría de la modificación no ya de los tres artículos mencionados sino únicamente del 81. Quisiera que me aclararan esta cuestión porque con la simple lectura del artículo 81 me animaría a decir que no habría ningún inconveniente en compatibilizar la redacción. Pero hay que comprender que a los artículos anteriores no po-

demos darles el tratamiento que nos solicitan. Si se tratara solamente del artículo 81 estaríamos en condiciones de compatibilizar la redacción, sustituyéndola por la que ha propuesto el señor diputado Durañona y Vedia.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda.— Señor presidente: esto es simple: con las aclaraciones que han hecho los señores diputados Ibarbia y Durañona y Vedia, e incluso con lo que acaba de decir el señor diputado Balestrini, con la forma que estamos discutiendo únicamente estaba afectado el artículo 81. El señor diputado Balestrini se refirió a una sugerencia de los senadores para facilitar el tratamiento y consecuentemente la promulgación de la ley, comprendiendo a otros artículos. La redacción del artículo 81 es muy fácil de ser compatibilizada por cuanto, en honor a la verdad, es muy amplio lo que plantea el señor diputado Durañona y Vedia pues dice que el Poder Ejecutivo es quien designará la autoridad de aplicación a los efectos de reglamentar y aplicar el instrumento legal. Por lo tanto, el artículo que hay que compatibilizar es el 81.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.).— Señor presidente: si la conclusión del señor diputado Borda, presidente de la comisión que es cabecera para el tratamiento de esta iniciativa, es ésta y él ha analizado detenidamente estos artículos; debe ser correcta y la suscribo.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Juncosa.— Señor presidente: propongo la supresión del artículo 8º, que se refiere a la constitución de sociedades calificadoras de riesgo. Si bien es cierto que son sociedades privadas y que el artículo no es imperativo —por cuanto dice que el Poder Ejecutivo estimulará a las sociedades calificadoras de riesgo—, considero que se va a crear una instancia para el otorgamiento de créditos a la pequeña y mediana empresa que significará un obstáculo en su concesión. En consecuencia, se producirá un perjuicio, un problema burocrático, un retardo, que afectará a aquel que pida un crédito.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Bullrich.— Señor presidente: propongo que al final del artículo 3º —que se refiere a las condiciones de los créditos, bonificaciones y facilidades que obtendrán las pequeñas y

medianas empresas— se agregue lo siguiente: "Mediante esos instrumentos se favorecerá con una bonificación especial a las PYMES nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes características: a) Regiones en las que se registren tasas de crecimiento del PBI inferiores a la media nacional; b) Regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional."

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Abihaggie.— Señor presidente: solicito que al final del artículo 22 se agregue lo siguiente: "El Programa Nacional de Capacitación se desarrollará en forma descentralizada a través de convenios con las provincias, las municipalidades y las universidades."

Asimismo solicito que se agregue, como párrafo final del artículo 30, lo siguiente: "Invítase a los gobiernos provinciales y municipales a adherir a las disposiciones del presente capítulo."

Propongo también que el artículo 35 quede redactado de la siguiente forma: "Operaciones prohibidas. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social."

Por último, propongo que al artículo 46 se le agregue un inciso 6) que haga mención expresa del aporte de los socios protectores.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.).— Señor presidente: la comisión acepta las modificaciones propuestas por los señores diputados Bullrich y Abihaggie.

Sr. Green.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green.— Señor presidente: en el artículo 33 sugiero eliminar la palabra "principal", y en el segundo párrafo de dicho artículo suprimir la palabra "asimismo".

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.).— La comisión no está en condiciones de aceptar.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchueto Blasco.— Señor presidente: respecto de la propuesta de la señora diputada Bullrich quiero aclarar que en mi provincia existe un alto valor relativo de PBI, pero ello se debe a exportaciones de productos, no

al desarrollo de las PYMES. Pero de todas maneras voy a votar en forma positiva esta propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión se va a votar el título I, que comprende los artículos 1º a 31.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título II con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, que comprende los artículos 32 a 82.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título III, que comprende los artículos 83 a 105.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: en el artículo 84 se propone sustituir "ley" por "título".

En el artículo 86, inciso b), se propicia agregar "apartado 1º", después de "artículo 13" quedando el inciso b) redactado de la siguiente forma: "La sección especial establecida en el artículo 13, apartado 1), del decreto 342/92...".

También proponemos un artículo nuevo —que sería el 88— debiéndose en consecuencia reordenar la numeración de los artículos siguientes, es decir que el actual artículo 88 pasa a ser 89 y así sucesivamente. El artículo 88 nuevo dice así: "El incumplimiento de las obligaciones registrales previstas en esta Sección o en la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) podrá ser sancionado hasta con la exclusión del régimen de la presente ley, además de las penalidades establecidas en las leyes 18.694, 23.771 y 24.013.

"La comprobación y el juzgamiento de las omisiones registrales citadas en el apartado anterior se realizará en todo el territorio del país conforme el procedimiento establecido en la ley 18.695 y sus modificatorias."

En el artículo 96, que pasa a ser 97, proponemos agregar en el primer párrafo, después de "...asociación sindical", los vocablos "signataria del convenio colectivo...". En consecuencia, el primer párrafo del artículo quedaría redactado así: "Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical signataria del convenio colectivo la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Bullrich. — Señor presidente: desco plantear un agregado al artículo 83. Creemos que se ha omitido la posibilidad de la simulación o utilización del fraude para acceder a los beneficios de la ley, y por eso planteamos el siguiente agregado al final del artículo: "Salvo que por el propósito de acogerse al presente régimen especial, la empresa haya procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por la Ley de Contrato de Trabajo. Cesarán todos los beneficios a los que se hubiese acogido o pudiera acogerse en virtud de la presente ley."

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta?

Sr. Borda. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: deseo solicitar una modificación al artículo 83. Propongo que el inciso a) diga: "su plantel no supere los veinte (20) trabajadores".

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta?

Sr. Borda. — La comisión no acepta.

Sra. Zuccardi. — En cuanto al artículo 97 propongo su eliminación ya que no compartimos el uso de los recursos del Fondo Nacional de Empleo par subvencionar los despidos. Estos recursos tienen un fin determinado que debe ser respetado. De otra forma, y como se expresa en la norma, parecería que se facilita el despido y se premia a la empresa que expulsa al personal.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título III, que incluye los artículos 83 a 106, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 107 (106 en el despacho original) es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado. (Applausos.)

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 504.)

Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores diputados Miguel Angel Balestrini, Michelli y Gazia, y por los señores diputados Perrini y Salino.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.¹

6

MOCION DE ORDEN

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: teniendo en cuenta lo que se había acordado, ahora correspondería que continuemos esta sesión con la presencia del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Entonces, salvo mejor opinión de los distintos bloques, me parece procedente realizar un breve cuarto intermedio para ocuparnos de dos cosas. En primer lugar, esperar al señor ministro; en segundo lugar, acordar el procedimiento al cual estaremos dispuestos a ajustarnos para utilizar en forma eficiente el tiempo del que disponemos para esta reunión. La Presidencia podría citar a los presidentes de bloque para analizar esta cuestión.

Por otro lado, voy a solicitar la atención de todos los señores diputados porque me parece que se ha producido una situación que tiene cierta gravedad.

En el curso de la tarde he tenido oportunidad de ver algún noticiero y de leer algún cable de una agencia en los cuales se han sembrado dudas acerca de la validez del quórum con el que se inició esta sesión.

Se trata de una cuestión realmente preocupante porque sólo aquellos que estuvimos presentes desde el inicio de la sesión tenemos idea del esfuerzo que ha significado constituir el quórum, a pesar de la oposición muy dura y tenaz de algunos bloques que no desearían participar.

En nuestro bloque en particular consultábamos uno a uno a cada diputado, nos buscábamos y sabíamos el recorrido que debían hacer para llegar a este recinto, a qué hora llegaban los aviones, qué aviones alternativos habían tomado desde el interior por las malas condiciones climáticas de algunos lugares de nuestro país; hasta teníamos conocimiento de quiénes habían viajado en auto para estar hoy presentes. Sin duda fue un

esfuerzo importante y logramos conformar el quórum legal.

Nos duele que se haya transmitido esa información en forma equivocada. No voy a atribuir intencionalidad ni a hacer conjeturas de naturaleza alguna, pero sí debo decir que esto nos duele, porque este cuerpo trabaja de la única forma en que se debe trabajar: hacia adelante y no hacia atrás, con errores, aciertos, propuestas y disensos. Generar dudas sobre la validez de un hecho que fue totalmente legítimo — como lo certifican los veinte bloques políticos presentes en esta Cámara — es algo que no corresponde.

Sin duda que debe haber algunos que se alegran por el hecho de que existan titulares periodísticos que siembren dudas sobre la validez o legitimidad del quórum; pero debe ser apenas una ínfima minoría la que se pueda alegrar de semejantes titulares.

Además, todo eso no se compadece con la verdad. Los que estuvimos presentes desde el inicio de la sesión sabemos que el quórum fue legítimo, y que había 134 señores diputados al inicio de la reunión. Existe una documentación obrante en la Presidencia, que ha sido distribuida y en la que figura el nombre y apellido de cada uno de los diputados que estuvimos presentes al comienzo de esta sesión. Solicito que esa lista se distribuya entre quienes estamos sentados en estas bancas para que se compruebe si en ella figura como presente alguien que estuvo ausente.

No es bueno para las instituciones sembrar este tipo de dudas o inquietudes; no sirve ni ayuda. No asigno intencionalidades ni formulo conjeturas, pero para terminar con estas cuestiones, aunque no sé si es totalmente procedente, me parece que sería oportuno que la Cámara ratificara la validez y legitimidad de la presencia de los 134 diputados que estuvimos en nuestras bancas al inicio de la sesión, como asimismo de los 14 legisladores que llegaron posteriormente, totalizando 148 presentes.

Nuestro bloque no tiene duda alguna, pero sería conveniente que tampoco la tenga la Cámara, y si alguien la tuviera pido que la exprese ahora y diga su verdad. Nosotros hemos manifestado nuestra verdad, hemos trabajado mucho para conformar el quórum, y no nos parece justo que se pretenda tender un manto de duda sobre un trabajo honesto y de una legitimidad total. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Antelo. — Señor presidente: hace ya un rato largo que se planteó esta cuestión, y quien

¹ Véase el texto de las inserciones en el Apéndice, (Pág. 514.) El texto de la inserción solicitada por el diputado Balestrini (M.A.) no figura por no haber sido remitido para su publicación.